

FRACTURA EXPUESTA

Nº 7 / Año IX / Primavera 2023



EXPORT



Menú energético

Territorios en bandeja

Edición y corrección de textos

Territorio de Ideas

Arte de tapa, diseño y diagramación

Mariana Verón
y Tomás Fernandez

Observatorio Petrolero Sur

(+54 11) 4373 6303
observatoriopetrolerosur@gmail.com
contacto@opsur.org.ar
www.opsur.org.ar
FB/ Observatorio Petrolero Sur
Twitter @op_sur
Buenos Aires / Neuquén
Argentina

*Esta publicación es apoyada
con fondos de:*



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**



**HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
CONO SUR**



Índice

pp. 4/5

**10 años Vaca Muerta
Continuidades y Fracturas**

pp. 6/10

**Vaca Muerta, la década fracturada
Entre el marketing y las promesas incumplidas**
por Fernando Cabrera Christiansen / Observatorio Petrolero Sur

pp. 11/14

**Los dólares de Vaca Muerta
No hay salida exportadora para este
esquema distributivo**
*por Marco Kofman / Enlace por la Justicia Energética
y Socioambiental*

pp. 15/18

**Un boom demasiado frágil
Breve reseña a veinte años de fracking
en los Estados Unidos**
por Nancy Piñeiro / Territorio de Ideas

pp. 19/22

**Yacimientos costa afuera y geopolítica corporativa
Namibia siempre estuvo cerca**
por Víctor Quilaqueo / Observatorio Petrolero Sur

pp. 23/26

**Transición energética y tratados de libre comercio
La estrategia comercial de la Unión Europea para
acceder a las materias primas críticas**
*por Luciana Ghiotto, Lucía Bárcena y Bettina Müller / Transnational
Institute (TNI)*

pp. 27/30

**Argentina en la descarbonización de los países centrales
Una carrera hacia el mismo lugar**
*por Hernán Scandizzo y Felipe Gutiérrez Ríos / Observatorio
Petrolero Sur*

pp. 31/34

**Colombia y el desafío de ser
una economía para la vida**
por Rosaura Barletta / Observatorio Petrolero Sur

pp. 35/38

De la pobreza energética a la energía para vivir
por Felipe Gutiérrez Ríos / Observatorio Petrolero Sur

Editorial

Un mañana mejor

Fractura Expuesta vuelve después de cuatro años. En ese tiempo pasaron muchas cosas que resultan difíciles de enumerar, aunque es imposible dejar de mencionar situaciones como la crisis sanitaria global generada por la pandemia de COVID-19, que puso en pausa al mundo y truncó millones de vidas. La magnitud del descalabro se reflejó en el pilar energético de la globalización capitalista, el petróleo. La incertidumbre que planteaba la pandemia se manifestó en Wall Street, donde por unos días la cotización del barril de crudo futuro de Texas fue negativa.

Otro hecho insoslayable es la invasión de Rusia a Ucrania. Esta guerra, que ha causado decenas de miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas, sacudió el tablero geopolítico de la energía, y sus réplicas se sienten en todo el planeta, no solo en Europa, que depende del gas ruso. Quienes promueven a Argentina como país exportador de combustibles fósiles subrayan cuán favorable es el escenario actual para su lanzamiento y apuran la construcción de infraestructuras mientras acondicionan los marcos regulatorios para despejar el camino hacia un mundo más caliente. Y argumentos similares utilizan quienes intentan posicionar al país como exportador de litio y de hidrógenos bajos en carbono, requeridos por el Norte Global para descarbonizar su matriz energética. (Un mercado creciente en el que la Unión Europea intenta imponer las reglas; por más que se pinte de verde, la esencia de la asimetría entre ambos permanece inalterada.)

En estos cuatro años también pasaron muchas cosas en Argentina. Un presidente terminó su mandato y comenzó otro. Si bien no está muy claro si el actual sigue en la Casa Rosada, cuando la revista esté en la calle ya sabremos quién lo reemplazó. En estos cuatro años, los discursos de odio y antiderechos resquebrajaron aún más el débil tejido social que se ha ido deshilachando progresivamente, en simultáneo con la degradación de esta democracia que cumple cuatro décadas. Quizás el consenso en torno al fracking (en realidad, en torno a los extractivismos), sostenido por las dirigencias políticas y empresarias, sea uno de los pocos que existen en el país. ¡Y hay que quebrar ese consenso! Es necesario hacerlo para reconstruir lazos no solo entre las personas, sino también con todas las formas de vida que habitan el planeta.

Este año se cumplió un decenio desde la puesta en producción del primer proyecto de explotación masiva de

hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Hace diez años, a través de un acuerdo repudiado en las calles y sostenido con represión, Argentina ingresó a la era del fracking; y aunque la lluvia de dólares anunciada en Vaca Muerta moja en otro lado, el pronóstico no cambia. Es más, se anuncian fuertes ráfagas de bienestar por la explotación de Vacas Muertas en la Patagonia Austral y tsunamis de bonanza que llegan desde las profundidades del mar Argentino. En los pronósticos de éxito, también aparecen el litio, el viento, el sol, el agua y todo lo que sea monetizable del territorio.

Fractura Expuesta nació un año antes de la firma de aquel acuerdo que allanó el camino al fracking. Necesitábamos una herramienta comunicacional para dar batalla, para advertir, en base a la experiencia en otras regiones, sobre los riesgos del proyecto en que se estaba embarcando el país, y también para contribuir a la construcción colectiva de alternativas, no solo energéticas. En esa senda continuamos porque es necesario seguir, alimentar debates, asomarnos a los caminos recorridos en otras latitudes de Nuestramérica y definir posiciones. Con esos mismos objetivos pensamos esta edición, en la que analizamos los diez años de Vaca Muerta desde diferentes abordajes: las promesas cumplidas e incumplidas, las transformaciones sociales y territoriales, los espejos en que se mira la difunta res y su proyección espectral. También pusimos el ojo sobre la “gobernanza” de los materiales críticos para la transición energética (del Norte Global), sobre el modo en que interviene la Unión Europea, la forma en que se alinean los Gobiernos locales y las marcas que ya han comenzado a aparecer en nuestros territorios. Y, como venimos haciendo desde hace varias ediciones, nos acercamos a los debates que plantean otros mundos posibles y otras formas de vincularnos con la energía.

Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes la alegría de cumplir un nuevo año. Aunque parezca increíble, ya han pasado 15 años desde el nacimiento del OPSur. A veces parece que no avanzamos porque, como decíamos antes, los Gobiernos y las empresas siguen prometiendo futuro con viejas recetas extractivistas. Aunque quede mucho por delante, cuando miramos hacia atrás, vemos que hemos recorrido un largo camino. Y aunque el futuro no parezca prometedor, y nuestros territorios se sirvan en bandeja para el menú energético del Norte Global, seguiremos construyendo. Porque un mañana mejor se construye. ▶

10 años de Vaca Muerta

Continuidades y fracturas



Llevamos poco más de una década montados en la euforia petrolera. El descubrimiento de Vaca Muerta modificó por completo el panorama energético del país. Como en una película en la que se aceleran los acontecimientos, en pocos años vivimos la renacionalización parcial de YPF, el acuerdo con Chevron y el desembarco del *fracking* a escala masiva. Cuestiones que eran parte de la literatura lejana de la revolución del shale norteamericano —como las fracturas y los sismos inducidos— pasaron a ser parte de la geografía argentina. Vaca Muerta se transformó

en un megaproyecto cuyas ramificaciones superan las fronteras provinciales y nacionales.

Todo momento político tiene su relato. Al comienzo de esa década se habló de soberanía energética, de control por parte del Estado, de desarrollo. Se minimizaron los riesgos del *fracking* y se denostaron las críticas. Se habló de terrorismo ambiental. ¿Cuánto hay de continuidad y cuánto de fractura en relación con ese momento político y qué cambió en esta década? En este dossier nos proponemos indagar en esta década de Vaca Muerta a través de cuatro miradas.



Foto Pablo Piovano



En la primera nota, Fernando Cabrera Christiansen analiza las promesas del *fracking* y señala que, actualmente, sus resultados son más contradictorios de lo que parece en los discursos oficiales. En la segunda nota, Marco Kofman revisa por qué la utopía de una Vaca Muerta generadora de divisas se desmorona en el actual escenario distributivo. El financiamiento público del “boom del *fracking*” en Estados Unidos se pone de relieve en el artículo de Nancy Piñeiro. Por último, Víctor Quilaqueo ubica la avanzada de la explotación de hidrocarburos en el mar Argentino (¿la Vaca Ahogada?) en una dinámica global de aprovisionamiento

energético por parte de las grandes potencias, en un contexto internacional conflictivo.

Hablar de *fracking* o de energías extremas no es solo hablar de contaminación e impactos ambientales, sino también discutir qué modelo de sociedad se instaura a partir de la forma de extraer, transformar y consumir la energía. Más allá de las promesas utópicas (y la realidad distópica) que se tejen en Vaca Muerta, nos interesa evaluar qué forma tomó el modelo energético del capitalismo argentino en el transcurso de esta década. ▶



Vaca Muerta, la década fracturada

Entre el marketing y las promesas incumplidas

Fernando Cabrera Christiansen / Observatorio Petrolero Sur

El 28 de agosto se cumplieron diez años del acuerdo entre la provincia de Neuquén, YPF y Chevron para explotar el área no convencional Loma Campana. La aprobación legislativa fue el nacimiento formal de Vaca Muerta y dio origen a la era del *fracking*. El desarrollo de ese megaproyecto se legitimó con tres promesas: el autoabastecimiento energético, la obtención de divisas a través de saldos exportables y el desarrollo con inclusión en las “provincias productoras”. En aquel entonces, según el Gobierno nacional, la garantía para alcanzar esos objetivos era el control estatal de YPF, dado que aseguraría la “soberanía energética” a la par de los buenos resultados económicos, tanto para el país como para los accionistas de la empresa.

Tras una década de explotación, los resultados de la principal apuesta energética del país son más contradictorios de lo que se plasma en los discursos publicitarios y gubernamentales. Un balance más pormenorizado del periodo revela aristas que no aparecen en lo que en general se promociona. En este artículo propongo una rápida historización de las principales políticas de esta década fracturada, una evaluación de las promesas iniciales y un recorrido por los impactos que suelen omitir o minimizar las voces más escuchadas del análisis energético. Este balance se publica en pleno avance de la instalación de nuevos ductos destinados a incrementar la capacidad de extracción y exportación de hidrocarburos, con la cuestión socioambiental aún como punto ciego.

Todo el poder a las petroleras

En estos años la política pública dinamizó Vaca Muerta en un proceso expansivo que tuvo tres momentos. El primero se extiende desde la expropiación

parcial de YPF y el acuerdo con Chevron hasta que se verifica en el país la caída del precio internacional del barril a mediados de 2014. El segundo periodo expansivo se da entre 2017 y 2019; y el tercero comienza después de la pandemia.

Tras varios pasos en falso, la gestión kirchnerista (2003-2015) propició una intervención fuerte en el sector recién a partir de 2012, con la expropiación parcial de YPF y el avance sobre yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Estas definiciones se tomaron mientras Estados Unidos exportaba el *fracking* a otras zonas del mundo, y en un contexto en el que Argentina empezó a tener dificultades de acceso a las divisas necesarias para importar gas, combustible que todavía supone más de la mitad de las fuentes primarias que consume el país. Sin embargo, por esas particularidades de la política público-empresarial, el primer proyecto de *fracking*, que llevaron adelante Chevron e YPF, tuvo foco en el petróleo.

La caída del precio internacional del barril en 2014 y el cambio de Gobierno frenaron la expansión inicial. La política energética de Mauricio Macri (2015-2019) fue la liberalización del sector, la flexibilización laboral, la focalización de los subsidios —sobre todo para proyectos de gas de Tecpetrol y CGC, de Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian respectivamente— y los tarifazos. Este conjunto de medidas dio un nuevo impulso a la extracción de hidrocarburos. Duró poco. Aquel arranque se frenó por la concurrencia de las restricciones impuestas por el FMI a los subsidios y la imposibilidad política, generada por la devaluación, para trasladar los precios dolarizados de la energía a las tarifas.

Alberto Fernández (2019-2023) finaliza un Gobierno que arrancó cuestionando el enamoramiento generalizado hacia Vaca Muerta, y poco después corrió detrás de ella. Su gestión se caracterizó por las zancadillas entre funcionarios de las distintas dependencias de Energía;



solo tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía se implementaron programas de beneficios reclamados por las empresas y se pusieron en marcha obras de infraestructura, varias veces anunciadas, que buscan delinear un futuro exportador para Vaca Muerta. Este horizonte se habilitó con la guerra en Ucrania al generar un aumento de precios internacionales y reconfigurar el escenario energético mundial. En términos extractivos, después de la pandemia se incrementó la actividad sobre la formación para la exportación de crudo no convencional.

Un torniquete que no frena la sangría

Una de las promesas de Vaca Muerta era que solucionaría la sangría de dólares. Veamos.

La dinamización de la extracción en Vaca Muerta tiene un componente exógeno: busca la apropiación de renta mediante la exportación de hidrocarburos, fundamentalmente de crudo. Se exporta crudo neuquino desde 2020, luego de más de una década sin hacerlo. Este

proceso es fruto de la combinación del aumento del precio internacional y la apertura de mercados.

En términos generales, hasta la pandemia, la explotación de Vaca Muerta permitió moderar el declino de la extracción nacional de hidrocarburos, y a partir de 2021 tuvo un acelerado crecimiento en el sector del petróleo. Los publicitados resultados extractivos de Vaca Muerta, sin embargo, contrastan con la caída de los yacimientos convencionales a nivel nacional, en la que se conjuga el declino natural con la migración de la inversión hacia no convencionales.

La producción de crudo ronda los 630 000 barriles diarios, aún así, todavía está lejos del pico de extracción de 847 000 barriles promedio en 1998. De todos modos, Neuquén sí superó su récord histórico: en diciembre de 2022 alcanzó los 308 660 barriles diarios, con lo cual dejó atrás los 308 000 de octubre de 1998.¹ Esta expansión se debe a que hay un interés empresarial mayor por la posibilidad de exportación; el crudo tiene más posibilidades de transporte; y, en comparación con la del gas, la extracción convencional ha tenido una caída menor.

1// Ministerio de Energía y Recursos Naturales, "Neuquén alcanzó máxima producción de petróleo en su historia", en, Gobierno del Neuquén, 19/01/ 2023. Disponible en línea.

En el caso del gas, los “récorde” han podido frenar la caída de la extracción total, que se sostiene alrededor de los 130 millones de metros cúbicos diarios desde el 2019 y no alcanza para garantizar el consumo nacional. La capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina sería el principal motivo de ese techo. Desde el Gobierno esperan que la finalización del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte permita abastecer la demanda nacional y, en un futuro, exportar.

De esta manera, los no convencionales colaboran en la balanza comercial: disminuyen la importación de gas y generan dólares por la exportación de crudo. Pero tras 10 años de explotación y millones de dólares de inversión pública y privada, todavía se espera que ese resultado cambie de signo. Todavía hoy la balanza comercial del sector es deficitaria.

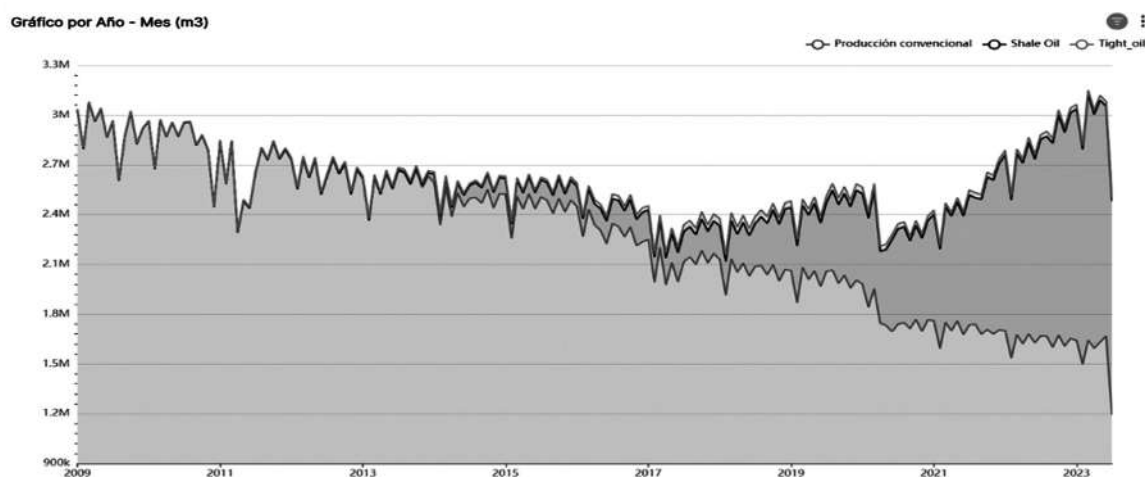
Por otra parte, más allá de esta expansión de la extracción, dos números más impactan sobre el resultado de las divisas del sector. Por un lado, la importación de combustibles premium implicó la salida de 3000 millones de dólares en 2022, el doble del monto de 2013. Por el otro, la pérdida financiera de dólares de las petroleras seguirá siendo un problema central en la balanza cambiaria, como explica Marco Kofman en otra nota de esta revista.

Neuquén no es una provincia rica

Como resultado de estos 10 años, se verifica una centralidad desmesurada de la Cuenca Neuquina en desmedro de las otras cuatro cuencas productivas: Golfo San Jorge, Austral, Cuyo y Noroeste. La Cuenca Neuquina abarca parcialmente a las provincias de Mendoza, Río Negro y La Pampa, pero su expansión está centrada en la provincia de Neuquén. En 2013, esa cuenca generaba el 54 % del gas, y este año ese porcentaje subió al 69 %. En ese mismo lapso, el petróleo dio un salto del 41 % al 63 %, y le arrebató el primer lugar a la Cuenca del Golfo San Jorge, históricamente la principal exportadora nacional de crudo, que perdió 15 puntos porcentuales. En ese periodo, la extracción de crudo a nivel nacional trepó de 550 000 a 630 000 barriles diarios.²

Según la Subsecretaría de Energía de Neuquén, entre 2013 y 2022 llegaron más de 40 000 millones de dólares de inversión, sumas que no tuvo ningún otro distrito. Sin embargo, en términos económicos, Neuquén es una más del montón: tiene índices sociales similares a los del país. Como en una puerta giratoria, los dólares que llegan se van sin generar un proceso virtuoso de gran envergadura. Lo producido queda en manos de las empresas.

Producción de petróleo convencional y no convencional (m3)



Fuente: Secretaría de Energía

2// Todos los datos de extracción de la nota, a menos que se especifique otra fuente, son de la Secretaría de Energía de la Nación.

Los beneficios presupuestarios del petróleo no son tantos. Entre regalías e ingresos brutos -los dos ítems más relacionados con la actividad petrolera-, en los últimos años el Estado neuquino viene recaudando aproximadamente un 60% de su presupuesto: casi lo mismo que destina a salarios, siendo el principal empleador en la provincia. Es decir, se queda sin dinero proveniente de la extracción petrolera para cubrir otro tipo de inversiones.

otras provincias, los sueldos de los empleados públicos no son malos, pero, nuevamente, no alcanzan para vivir en un territorio indexado a precios petroleros. Por otro lado, la informalidad ronda el 35 %, un nivel similar al del resto del país, sumido en una profunda crisis.³

Por otra parte, aunque es innegable que hay una fuerte generación de empleo privado, la pobreza en el conglomerado Neuquén-Plottier, el más importante de la región,

el Gobierno no pudo bajar el stock de deuda. El gobernador Omar Gutiérrez incluso ha terminado su gestión pidiendo a la Legislatura que le permita otro endeudamiento de 150 millones de dólares para amortizar los vencimientos de 2024. De cualquier modo, la deuda se mantiene en una cantidad que la provincia puede afrontar.

Tras una década de explotación están lejos de cumplirse las expectativas de Vaca Muerta como dinamizador del sector productivo;

Foto Martín Álvarez Mullally



Por otro lado, según el Ministerio de Producción de la Nación, el empleo vinculado a la actividad petrolera, que tiene mejores salarios que el resto de los sectores, alcanzó en noviembre de 2022 el 16,7 %, un porcentaje relevante pero minoritario. El resto de las actividades cobran salarios notablemente más bajos y deben afrontar costos de vida asociados a los precios petroleros. Esto convierte a la puja salarial del sector en una variable central de la economía gubernamental. Comparados con

es similar a la del país: según el INDEC, en el segundo semestre de 2022 el porcentaje de personas pobres fue de 38,4 %, mientras que el promedio patagónico fue de 34,7 %; y el nacional, de 39,2 %. La llegada cotidiana de personas en busca de trabajo y los altos precios son algunos de los motivos de estos abultados números.

Otro ejemplo de las limitaciones presupuestarias de la provincia es que en los últimos años de récords mensuales de extracción,

los encadenamientos han sido escasos, y los beneficios, sectoriales. Los números demuestran que toda la riqueza generada se queda en las empresas. Así las cosas, el futuro neuquino no parece orientarse al mito idealizado de la Dubái que se promociona, sino hacia Chubut, donde tras 100 años de explotación, la retracción en la actividad petrolera solo dejó crisis social, económica y política, problemas sanitarios y contaminación.

3// Este porcentaje de informalidad es un aproximado; se toma como base el total de personas que en el último censo poblacional dijeron estar trabajando y la diferencia con los empleos registrados tanto en el sector público como en el privado.

Sin garantías

La petrolera parcialmente estatizada, YPF, es la principal empresa del país y cumple un rol central en instalar la confusión entre bienestar general y beneficio corporativo. YPF funciona como articulador imaginario de los intereses privados y públicos, y su legitimidad es central en el desarrollo de este megaproyecto.

La expropiación parcial de YPF fue crucial para el avance sobre los no convencionales. Esta política demoró la transición hacia una menor dependencia de fuentes fósiles y una revisión estructural del transporte, la industria y la infraestructura domiciliaria, como principales sectores de consumo.

Analizando la información de la Secretaría de Energía, en mayo de este año la extracción de gas de la Cuenca Neuquina, dividida por porcentaje de participación en las concesiones, ubica a YPF en el primer lugar con el 33 % seguida por Tecpetrol (19 %), Pampa Energía (10 %), Total (7 %), Pan American Energy (7 %) y Pluspetrol (6 %). A nivel nacional, con ese mismo formato, YPF extrae el 26 %. Mientras que, en relación con el crudo, en la misma fecha YPF extrajo el 55 %, pero el número baja a 39 % si se desagrega su producción según la participación en concesiones. La siguen Vista (11 %), Shell (7 %), Pluspetrol (7 %), Chevron (6 %) y Petronas (6 %). YPF extrae el 48 % del petróleo nacional y es la segunda en exportación, la primera es Pan American Energy; Pampa Energía, Vista, Shell, CNHC (YPF y Chevron) y Petronas también integran el grupo.

En materia de infraestructura, YPF juega un papel ambiguo. Aunque todo el entramado de ductos está pensado con la perspectiva del horizonte exportador de Vaca Muerta, la obra más relevante hasta el momento es el gasoducto Néstor Kirchner, de la cual YPF no participó como financiador. Al menos, en una primera etapa, dicho gasoducto se vincula con la búsqueda por aumentar la extracción y el transporte de gas a nivel nacional, y minimizar los gastos de su importación.

YPF sí financió, en cambio, otros grandes oleoductos de exportación, con la obtención de renta como prioridad. Es el caso del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que terminaría en un puerto petrolero de importancia a nivel latinoamericano proyectado en el golfo San Matías, que también beneficiaría a cinco compañías privadas: Shell, Vista O&G, Pluspetrol, Pampa Energía y Pan American Energy. YPF utilizó su legitimidad para allanar el camino a la modificación de una ley provincial que impedía la instalación de infraestructuras petroleras en dicho golfo y también para contrarrestar las críticas de asambleas socioambientales y organizaciones ecologistas. Un

proyecto viciado de origen, en cuyo proceso se recurrió a patotas para impedir que se escucharan objeciones en la audiencia pública realizada en agosto en Sierra Grande, la localidad rionegrina en la que se proyecta la construcción del puerto y la terminal de tanques de almacenamiento.

Así las cosas, YPF pone su capacidad empresarial en el proyecto de *fracking* en Vaca Muerta legitimando y colaborando con los beneficios de otras empresas de capitales transnacionales y nacionales que ocupan un lugar secundario en el debate público. Hace inversiones con el foco en la rentabilidad y beneficia a sus accionistas privados. Y más allá del marketing, sus estándares ambientales, como lo demuestran los incidentes neuquinos, son peores que los del promedio de la industria: de los 2049 que las empresas denunciaron ante la Subsecretaría de Ambiente neuquina en 2021, la compañía de bandera fue responsable del 77 %, un índice que está muy por encima de sus niveles de extracción. Ese mismo año, de las áreas operadas por YPF en la provincia de Neuquén se extrajo el 60,7 % del crudo y el 38,2 % del gas.

Hundirse en el problema

El análisis de esta década de *fracking* pone en entredicho el marketing oficial. En términos de dólares, aunque los no convencionales colaboran con la balanza comercial, el sector sigue siendo deficitario. A nivel territorial, la provincia de Neuquén ve pasar de largo las ganancias de Vaca Muerta, que se concentran en algunos pocos ganadores y tantos perdedores como en el resto del país. Mientras tanto, la YPF bajo gestión estatal tiene un comportamiento empresarial que privilegia la obtención de renta y pone a jugar su legitimidad social para hacer crecer el megaproyecto Vaca Muerta.

Aun si sacamos de la ecuación los costos sociales y ambientales, esa apuesta llamada Vaca Muerta, en la que estuvieron focalizadas las políticas, las inversiones y las expectativas nacionales en la última década, sigue sin ofrecer resultados tan claros como los que presentan en sus discursos los gobiernos y las empresas. La obstinación por este desarrollo, lejos de sacarnos del problema, nos hunde más en él. ➤

Los dólares de Vaca Muerta

No hay salida exportadora para este esquema distributivo

por Marco Kofman / Enlace para la Justicia Energética y Socioambiental

Foto Argentina.gob.ar



La fragilidad externa de la economía argentina se profundizó en los últimos años. No solo hacen falta dólares para importar insumos industriales y algunos bienes finales para el funcionamiento de nuestra economía, sino que la demanda de divisas por parte de empresas privadas para atender los pagos asociados a su propio endeudamiento es cada vez mayor. Al mismo tiempo, el cambio regresivo en la distribución del ingreso sumó presión al problema: las empresas aumentaron sus excedentes y tratan de dolarizarlos.

En este escenario, la opción de la “salida exportadora” a la crisis pierde sustento. No hay compatibilidad entre el actual esquema distributivo y el equilibrio de las cuentas externas. La apertura comercial de nuestro sector energético, posibilitada por el desarrollo de Vaca Muerta, puede derivar en la internacionalización y la dolarización de los precios locales sin saldar el problema externo de la Argentina.

El sector energético como problema nacional

El déficit externo de la energía acumulado desde 2011 es superior al volumen del préstamo del FMI: en poco más de una década, el sistema energético le costó 50 284 millones de dólares a la economía nacional.

Hasta 2018, el saldo de divisas negativo se explicaba en el aspecto comercial. En ese período, las importaciones de gas, GNL y otros combustibles crecían, mientras que las inversiones en Vaca Muerta alcanzaban a frenar el declino de la curva de extracción de gas, aunque no lograron revertirlo. En los últimos años, este panorama cambió parcialmente y el déficit comercial devino financiero.

Por otra parte, las empresas del sector comenzaron a exportar crudo extraído del yacimiento para compensar una porción de la brecha comercial negativa del gas. De modo que, en los últimos cuatro años, el déficit comercial se redujo a un tercio de la cifra del período anterior. Pero se profundizó, en cambio, el problema financiero: las empresas endeudadas masivamente durante la etapa anterior ahora requieren dólares para pagar el capital y los intereses de los créditos contraídos.

Por un lado, según el *Informe sobre deuda externa privada al 31 de marzo de 2023* del Banco Central, más de la mitad de este endeudamiento es con empresas vinculadas. Por otro lado, una gran parte de este endeudamiento se produjo de forma simultánea a un fuerte proceso de formación de activos externos por parte de las mismas empresas. Entre 2016 y 2019 las empresas se endeudaron en dólares por 15 300 millones mientras dolarizaban sus excedentes por un monto similar, 15 100 millones de dólares. Es decir, las empresas tomaron deuda en dólares a pesar de que ya disponían del dinero en esa moneda.

En el informe de la CEPAL *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (2023)*, se destaca la particularidad de la forma que asume la inversión extranjera directa en nuestro país. Mientras que, en la región de América Latina y el Caribe, los préstamos intrafirma en 2022 representaron el 21 % de la inversión externa, en nuestro país tal participación trepó al 57 %. Por el contrario, los aportes de capital, es decir, las inversiones realizadas con capital propio, representaron el 36 % de la inversión extranjera en la región y solo el 5 % en el caso argentino.

Para la CEPAL, una de las principales razones que lleva a las empresas a financiar sus operaciones por medio de estos préstamos tiene que ver con la variable fiscal. Mediante una estrategia que en la literatura económica se conoce como “planificación fiscal nociva”, las compañías pueden minimizar los impuestos sobre beneficios incrementando las transacciones comerciales y financieras con empresas vinculadas radicadas en el exterior. En el caso argentino, habría, en verdad, otra razón preponderante, que tiene que ver con la posibilidad de acceder al mercado de cambios para el pago de intereses y la devolución de préstamos en un contexto de restricciones cambiarias. En otras palabras, este mecanismo les permite a las empresas pagar menos impuestos (porque el costo financiero reduce la ganancia declarada) y remitir utilidades bajo la forma de intereses, incluso cuando las utilidades existen o son reducidas.

Con esta raíz y esta particularidad, el problema financiero pasó a primer plano. Entre enero de 2020 y mayo de 2023, el rojo cambiario del sector energético fue de 17 600 millones de dólares, de los cuales 11 200 millones (el 64 %) se explican por este aspecto. El problema comercial se redujo y, en consecuencia, representó el 36 % del déficit cambiario sectorial en lo que va del mandato del Frente de Todos.

El gasoducto y la posible reversión del balance cambiario energético

La puesta en funcionamiento del Gasoducto “Presidente Néstor Kirchner” provocará, en el corto plazo, una disminución de las importaciones de gas y de combustibles líquidos para la generación de electricidad, lo que mejorará las cuentas externas del sector. Más adelante, es posible que permita aprovechar los saldos exportables generados en los meses de verano y obtener así un ingreso importante de divisas.

Mientras tanto, es esperable que las exportaciones de crudo, que se adhieren a la lógica corporativa, continúen siendo relevantes en tanto siga siendo positiva la renta generada en la diferencia del precio internacional de este recurso con el costo interno de extracción, lo que incluye impuestos y transporte. En los primeros cinco meses de 2023, se mantuvo un ritmo de exportaciones de crudo equivalente a 108 000 barriles diarios. Se trata de cantidades similares a las de 2022, aunque con precios más bajos, lo que indica una reducción en el monto de divisas ingresadas.

Un riesgo asociado a la apertura comercial de nuestros mercados energéticos es la dolarización e internacionalización de sus precios primarios. Aquí, aparece el aspecto distributivo que, como veremos, pasó a ocupar un lugar central en el drama de la economía argentina. Las tensiones, en este caso, pasan por quién o quiénes capturan el diferencial entre el precio internacional de la energía y su costo de producción interno, que se espera que descienda a medida que la infraestructura permita escalar la actividad.¹

El problema económico más allá de la energía

El Gobierno de Mauricio Macri modificó la economía nacional en dos aspectos principales. Durante su mandato, se registró un endeudamiento externo de una dimensión sin precedentes, tanto del sector público como del sector privado. Este endeudamiento fue simultáneo a un proceso de fuga de divisas equivalente a cuatro veces el efecto externo de la sequía que afectó las cosechas de la temporada 2022-23, lo que derivó en una nueva intromisión del Fondo Monetario Internacional en la gestión de la economía local. En simultáneo, el conjunto de sus políticas económicas (devaluación, aumento de tarifas, ajuste fiscal y contención de

salarios y jubilaciones), provocó una transferencia de ingresos desde las personas trabajadoras activas y pasivas hacia el capital, lo que amplió el volumen de los excedentes económicos apropiados por diferentes actores concentrados de la economía.

Estos fenómenos, sumados al discurso antipolítico que impusieron los medios de comunicación masivos y a la consecuente fragmentación y volatilidad del voto popular, configuraron un Estado más débil.

Si desde 2011 la economía argentina se enfrentaba al clásico problema de la restricción externa —que históricamente le ha puesto un freno a su crecimiento por la escasez de divisas necesarias para sostener la actividad interna que requiere de la importación de insumos industriales y de determinados bienes finales de consumo y de capital—, con los cambios indicados el problema se profundizó y se reestructuró.

Los dólares no solo tienen que alcanzar ahora para las importaciones, sino también para atender el pago creciente de intereses por el endeudamiento externo y los vencimientos de capital de esa deuda, y, por si fuera poco, para soportar la presión para dolarizar los acrecentados excedentes presentes y acumulados por los sectores ganadores del período 2016-2019.

1// En los últimos años, el Banco Central de la República Argentina fijó un conjunto de restricciones para los pagos de intereses y capital por deuda con empresas vinculadas. Con la comunicación A 7106 de septiembre de 2020 se inició este camino de normas que modificaron el reglamento de "Exterior y Cambios" que regula el acceso al mercado de cambios de los agentes económicos. No obstante, las empresas que participan del Plan Gas, o aquellas que demuestren un incremento de las exportaciones, quedan, en gran medida, exentas de las restricciones más determinantes.

Foto Argentina.gob.ar



De este modo, el problema externo pasó a estar íntimamente ligado a la cuestión distributiva. El nivel de excedentes apropiados por el capital es inconsistente con el equilibrio de las cuentas externas.

Desde que comenzó el Gobierno del Frente de Todos, ingresaron 34 000 millones de dólares por el saldo positivo de la balanza comercial de bienes (exportaciones menos importaciones), pero la economía demandó 58 000 millones para atender las obligaciones financieras públicas y privadas, así como la exteriorización de excedentes privados.

Las herramientas de política económica para alterar la distribución del ingreso heredada del macrismo o bien no tuvieron el efecto previsto, o bien no se han intentado ni podido utilizar. La configuración de la estructura de poder, la fragilidad de la moneda nacional y la dependencia del FMI condicionaron la gestión del Frente de Todos, y expusieron las diferencias por sobre los acuerdos.

La llamada “salida exportadora” como solución a los problemas económicos de la Argentina, en este escenario, puede salir mal. En el caso energético,

ocurrirá una disputa concreta por la apropiación de la renta generada en el sector. Si se produce el fenómeno de internacionalización de los precios energéticos locales, esa renta pasaría a ser parte de los excedentes privados que presionan sobre los mercados cambiarios para dolarizarse.

Pero más allá de lo que ocurre específicamente en el sector, de no mediar un cambio distributivo perdurable en la economía que reduzca el nivel de los excedentes privados, entre cuyas condiciones primarias se cuenta el fortalecimiento de las capacidades políticas y económicas del Estado, el problema de la restricción externa seguirá presente aun con exportaciones crecientes. En un escenario así, la “salida exportadora” servirá principalmente para alimentar la fuga y no generará mejoras significativas en el empleo, en el progreso tecnológico, en la industria ni, por lo tanto, en la vida de las personas que habitan nuestro país. ➤

Foto Argentina.gob.ar

LA PAMPA

6570-75 2383 148 EL SIGLO
 POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
 VIVA ARGENTINA



Foto EcoFlight



Un boom demasiado frágil

Breve reseña a veinte años de fracking en los Estados Unidos

por Nancy Piñeiro / Territorio de Ideas

El fracking es como “un medicamento que se saltó todos los ensayos clínicos [...] y pasó directamente a la comercialización masiva”; así lo describe Adam Briggie en su libro *A Field Philosopher’s Guide to Fracking*,¹ una especie de guía de campo en la que el filósofo sale al territorio texano a estudiar la resistencia de un pequeño pueblo contra los gigantes de la perforación. La comparación es contundente y precisa; quienes han venido estudiando críticamente el llamado *boom* del fracking en Estados Unidos en los últimos dos decenios coinciden en que, a pesar de los distintos regímenes legales, fiscales y

corporativos que podemos hallar en los diferentes estados, varios denominadores comunes confluyen para que podamos hablar de una **institucionalización de la desigualdad**.

La técnica ha avanzado en distintos grados en zonas muy diversas, entre ellas, las formaciones de shale Marcellus y Utica, que abarcan los estados de Nueva York, Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, al noreste de los EE. UU.; al oeste, la formación de shale Monterrey (California); en Texas y parte de Nuevo México, las formaciones Eagle Ford, Permian y

I// Briggie, A. (2015). *A Field Philosopher’s Guide to Fracking. How One Texas Town Stood Up to Big Oil and Gas*. Liverlight. P.130

Barnett; la Bakken, que abarca Montana y Dakota del Norte. En todos los casos, es el Estado el que otorga el aval fundamental y facilita el proceder corporativo tanto en tierras fiscales (muchas de ellas previamente protegidas, como es el caso de los parques estatales en Ohio)² como privadas. Prácticamente ha abandonado su potestad regulatoria en términos ambientales. Basta con recordar que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) no regula los fluidos de inyección que utiliza el *fracking*. Así, las petroleras han quedado exentas de la ley federal que protege el agua potable.³

Hablamos de desigualdad: entre las ganancias de las principales corporaciones del sector, que han sabido navegar las olas de la volatilidad para cerrar 2022 con cifras récord tras la caída durante la pandemia, y los pobladores, que han concesionado sus tierras a petroleras sin contar con información oficial ni fidedigna.⁴ Es importante señalar que, según el régimen de propiedad más común en EE. UU., los propietarios de la tierra lo son también de los recursos del subsuelo, a menos que la propiedad se haya dividido y su dueño haya optado por vender los derechos minerales al estado o una corporación. Se trata del único país en el mundo en el que los propietarios “deciden” sobre el destino de los recursos que debieran ser un bien común (si es que puede hablarse de decisión ante la falta de información y las presiones de la industria petrolera).⁵

Finalmente, desigualdad entre perdedores y ganadores en términos de impactos socioambientales, que incluyen, entre otros: interrupción de la vida cotidiana, sismos inducidos, afectaciones a la salud.⁶

2// Puede consultarse: Center for Biological Diversity (24/01/2023). Biden Administration Oil, Gas Drilling Approvals Outpace Trump's; Earth Justice (04/04/2023). Ohio's Bizarre New Law Will Require the Leasing of State Parks for Fracking. Disponibles en línea. 3// Earthworks (s/f). The Halliburton Loophole. Disponible en línea.

4// Jerolmack, C. (2022). *Up To Heaven and Down to Earth. Fracking, Freedom, and Community in an American Town*. Princeton University Press.

5// Jerolmack, C. (21/04/2021). Fracking, freedom, and the tragedy of the commons. Princeton University Press. Disponible en línea.

6// Los riesgos y las consecuencias del fracking se han documentado extensivamente en las diferentes ediciones del *Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking*, Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility (CHPNY y PSR). Última edición, abril 2022. Resumen en castellano de la sexta edición disponible en línea. A los ya conocidos impactos ambientales del metano se suman las consecuencias en la salud del dióxido de nitrógeno (NO₂), el material particulado y el ozono (O₃). Un estudio reciente publicado en la revista científica *Environmental Research* estima que el costo de estas emisiones en la salud de los estadounidenses durante el año 2016 fue de USD 77 000 millones, siendo el NO₂ el de mayor impacto en la salud. Ver Jonathan J. Buonocore et al. (2023). "Air pollution and health impacts of oil & gas production in the United States". *Environmental Research: Health* 1. Disponible en línea.

En el país del norte, la masividad del *fracking* —que representó el 66 % de su producción total de petróleo y el 80 % de la de gas en 2022⁷— es una bomba de contaminación que calienta el planeta más allá de las fronteras nacionales. Un estudio del *Energy Policy Journal* publicado en mayo de 2022 calculó las emisiones de carbono de los proyectos fósiles más grandes del mundo (incluidos proyectos nuevos y en producción).⁸ Si bien China es el principal emisor, los proyectos de shale nuevos y existentes en EE. UU. encabezan la lista en gigatoneladas de CO₂, y el país del Norte se ubica como el segundo mayor contaminante.

Con una ayudita de mis amigos...

Desde 1975, cuando el Departamento de Energía comenzó a financiar el necesario casamiento entre la fractura hidráulica y la perforación horizontal, pasando por los 20 años que llevó perfeccionar el proceso para volverlo económicamente viable, hasta el día de hoy, han transcurrido casi cinco décadas.

Como las primeras pruebas fueron desastrosas, la mayoría en la industria pensaba que no tenía sentido apostar a esta nueva tecnología. La mayoría también se habría dado por vencida si no hubiera sido por la inversión gubernamental en investigación y desarrollo, las exenciones impositivas y los subsidios.⁹

En 1980 se aprobó el primer beneficio fiscal específicamente para el gas no convencional. Así, en los albores de la técnica, los créditos fiscales federales para las empresas perforadoras llegaron a los USD 10 000 millones entre 1980 y 2002.¹⁰ A partir del 2005 el *fracking* comienza a crecer exponencialmente. Se calcula que, en la actualidad, la industria fósil recibe (entre subsidios directos e indirectos) unos USD 15 000 millones." La mayor parte se la lleva la industria no convencional.

Estados Unidos pasó de producir un promedio anual de 5 M de barriles de petróleo por día y 597 500 millones de m³ de gas natural en 2008 a un récord anual de 12,3 M de barriles por día en 2019 y 1,02 billones de m³ de gas.

7// Energy Information Administration (2023). *Annual Energy Outlook*. Disponible en línea.

8// Véase Carrington, C y Taylor, M. (11/05/2022). Revealed: the 'carbon bombs' set to trigger catastrophic climate breakdown. The Guardian. Disponible en línea. El informe del *Energy Policy Journal* identifica los 425 proyectos de energía fósil más grandes del mundo y su impacto en cantidad de gigatoneladas de carbono: Kühne, K. et al. "Carbon Bombs" - Mapping key fossil fuel projects. *Energy Policy*. Vol. 166, 2022.

9// Twomey, D. F., Twomey, R. F., Farias, C., & Farias, G. (2014). Fracking: blasting the bedrock of business. *Competition Forum*, 12(1), 204-216. Disponible en línea.

10// Times Free Press (24/09/2012). Decades of federal dollars helped fuel gas boom. Disponible en línea.

11// Erickson, P. y Achakulwisut, P. (2021). *How subsidies aided the US shale oil and gas boom*. Stockholm Environment Institute. Disponible en línea.



Foto EcoFlight

Por primera vez en 60 años, el país comenzó a exportar más energía de la que importaba, y se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo y gas.¹² Pero la revolución del *fracking* no fue tal por una genialidad tecnológica facilitada por la magia del libre mercado: se bombearon ingentes cantidades de dinero público para que esto fuera posible. En parte, porque los números nunca cerraron sin una ayudita de los amigos. Ya antes de la pandemia, hacia finales de 2019, se informaba la quiebra de 42 compañías del sector de exploración y producción: precios bajos, deudas altas y flujos de caja negativos.¹³ Después llegó la pandemia, y cientos más se declararon en quiebra. Pero tras una baja sin precedentes, llegó la “bendición” de la guerra. Hoy en día, la industria es rentable gracias al aumento de la demanda que ha impulsado el conflicto bélico, pero no hay que olvidar que, entre 2010 y 2020, el *shale* en los EE. UU. perdió USD 300 000 millones.¹⁴ Ante este panorama, las grandes petroleras han modificado su estrategia. En lugar de perforar donde sea y a como dé lugar, como se hacía durante los años del boom, se optó por una mayor “disciplina” para responder a las preocupaciones de los

inversores. Las petroleras empezaron a concentrar sus esfuerzos en las formaciones más rentables, como la permiana, y con un nivel de actividad más gradual.¹⁵

En 2022 y en lo que va del año, las seis mayores operadoras en los Estados Unidos han declarado ganancias récord. Sin embargo, entre junio de 2022 y mayo de 2023, el precio del barril pasó de USD 120 a poco menos de USD 75. ¿Cómo se explican esas ganancias? De los 16 subsidios que puede recibir la industria fósil (directos e indirectos, a través de deducciones impositivas, bonificaciones y dinero fiscal para investigación y desarrollo), tres han sido fundamentales para apuntalar este auge de los no convencionales y su salida a flote sorteando la volatilidad del sector:¹⁶

► El llamado “subsidio geológico y geofísico” (G&G). Les permite a las compañías deducir parte de los costos exploratorios, y pueden recuperarlos dentro de los primeros dos años de comenzado el proyecto.

12// OGVenergy (23/05/2020). US remains biggest producer of oil, natural gas. Disponible en línea.

13// Hipple, K. (Enero 2020). Bankruptcies in Fracking Sector Mount in 2019. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Disponible en línea.

14// Wallace-Wells, D. (27/07/2022). Hardly Anyone Talks About How Fracking Was an Extraordinary Boondoggle. The New York Times. Disponible en línea.

15// Véase Worland, J. (10/03/2022). The Real Reason Big Oil Won't Save the U.S. from High Gas Prices. Time Business; Domonoske, C. (09/06/2023). America is going through an oil boom — and this time it's different. NPR Energy y Palmer, I. (25/04/2023). Put Your Money On The Permian. Forbes. Disponibles en línea.

16// Erickson, P. y Achakulwisut, P. (2021). How subsidies...



► El subsidio por costos intangibles de perforación (IDC). Constituye entre el 60 % y el 80 % del costo total de perforación. Se recupera en el transcurso del mismo año en que se realizó el pozo.

► Exención fiscal por agotamiento porcentual. Se trata de un 15 % de los ingresos brutos del petróleo y el gas que están libres de impuestos para los pequeños inversores y los productores independientes. Esta exención pretende reflejar la merma de reservas a lo largo del ciclo de vida de un pozo y se aplica a los recursos no renovables.

Obviamente, todos estos beneficios liberan flujo de caja y aumentan la rentabilidad. En 2021, el Stockholm Environment Institute publicó un estudio único en su tipo —dado que es casi imposible saber en detalle quiénes reciben qué tipo de subsidios (ni la AFIP estadounidense

ni las empresas brindan esta información)—, en el que concluyeron que los tres subsidios mencionados más arriba aumentaron el valor total estimado de los nuevos proyectos de petróleo y gas desarrollados en las últimas dos décadas en miles de millones de dólares, es decir, la diferencia que habrían estimado las empresas entre lo que costaría desarrollar el proyecto y las ganancias que se obtendrían. La mayor parte de estos subsidios se destinó a nuevos campos de petróleo y gas explotados en formaciones no convencionales.¹⁷ En lugar de hablar de ganancias a secas, deberíamos hablar de “ganancias subsidiadas”. ➤

17// Erickson, P. y Achakulwisut, P. (2021). How subsidies...

Yacimientos costa afuera y geopolítica corporativa

Namibia siempre estuvo cerca

por Víctor Quilaqueo / Observatorio Petrolero Sur

Las principales corporaciones petroleras del mundo gozan de buena salud. De la mano de políticas estatales, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos, avanzan en una disputa por asegurar materias primas donde la explotación costa afuera toma un lugar central. En ese contexto, se aproxima la exploración en el mar Argentino.

Foto Observatorio Petrolero Sur



La exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas del mar Argentino es una de las principales políticas energéticas de los últimos años. En otras notas, hemos revisado de qué manera se da este proceso y sus resistencias, que han permitido la masificación de un movimiento de defensa del mar en el litoral atlántico, desde la provincia de Buenos Aires a la de Tierra del Fuego.^{1/} En este artículo, revisamos el contexto internacional en el que se inscribe esta ampliación de

la frontera, que incluye las disputas por asegurar las cadenas de aprovisionamiento de materias primas que demandan los mercados de las economías centrales.

Las iniciativas de exploración y explotación se deben a relaciones geopolíticas, traccionadas principalmente pero no de manera exclusiva por Europa y Estados Unidos, quienes muy explícitamente le otorgan un valor central a su acceso al gas y al petróleo, y al control de

1// Desde 2018 hasta la fecha, un amplio arco de organizaciones ha tomado parte activa en la defensa jurídica y territorial frente a esta avanzada. Nos referimos a los esfuerzos de la Red de Comunidades Costeras y al trabajo de un verdadero ecosistema de organizaciones, asambleas, activistas, espacios de investigación y medios de comunicación que han contribuido a ampliar el debate y, en la medida de las posibilidades, detener la expansión de esta nueva frontera.



toda la cadena de producción e intercambios de lo que llaman materias primas críticas (cobre, cobalto, níquel, litio, entre otras decenas más de elementos).

Las palabras de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y la visita oficial a la Argentina de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en enero y junio de 2023 respectivamente, visibilizan algunos elementos de esta coyuntura.² En el caso de la primera, se viralizó un comentario realizado en una conferencia sobre la mirada de Estados Unidos sobre los “recursos naturales” de América Latina. Allí, Richardson ponderaba la existencia de litio, hidrocarburos, agua y minerales en casi todos los países de la región.³ Para muchas personas fue llamativo que se refiriera a estos recursos como “nuestros”, algo que actualizaba la visión de Latinoamérica como “patio trasero” de Estados Unidos.

La dignataria europea, por su parte, hizo menos declaraciones públicas, pero consolidó una política visible en la firma del Memorándum de Entendimiento

entre la Unión Europea y Argentina, cuya disposición central apunta a consolidar la cadena de valor de materias primas críticas para la transición energética y digital⁴ (ver la nota de Ghiotto, Bárcena y Müller).

La novedad del escenario de las últimas décadas la constituyen la crisis climática y el relativo agotamiento de yacimientos convencionales de hidrocarburos. Esto ha activado una serie de mecanismos económicos y políticos a fin de incorporar al mercado de bienes energéticos gas y petróleo de reservorios remotos o alojados en formaciones geológicas no convencionales.

Ganancias fósiles

En medio de este fervor por materias primas, el sector petrolero y energético global se muestra robusto, aferrado al crecimiento de la demanda de petróleo y gas. En ese contexto, apuesta al avance de nuevas fronteras y maniobra en un escenario global cuyos

2// *Página/12*, “La jefa del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina, con la mira en los recursos naturales y el vínculo con China” (11/4/2023). Disponible en línea.

3// Casa Rosada, “Memorándum de entendimiento para una asociación estratégica sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas entre la Unión Europea y la República Argentina” (13/6/2023).

4// *Energy Institute*, “Energy system struggles in face of geopolitical and environmental crises” (26/6/2023); *International Energy Agency*, “Oil Market Report - August 2023” (8/2023). Disponibles en línea. Las citas en inglés fueron traducidas por el autor.

resortes financieros acompañan la preeminencia de los fósiles.⁵ Empresas como Equinor, Shell, Qatar Energy y BP han informado ganancias históricas y proyectan más explotación de hidrocarburos para los próximos años.

En febrero, Shell informó ganancias récord,⁶ y BP anunció su propio hito y puso en suspenso su agenda de reducción de emisiones.⁷ Equinor, TotalEnergies y Eni siguen más o menos la misma senda, es decir, profundizan la extracción fósil. En un informe publicado por OilChange International dedicado a examinar los planes climáticos de estas compañías, se repite el panorama: “Por cada dólar de inversión en energías renovables en 2022, Equinor destinó 28 dólares más a la extracción de petróleo y gas, lo que contradice su objetivo de ser ‘una empresa líder en la transición energética’”.⁸ Por su parte, TotalEnergies, “además de aumentar la inversión en combustibles fósiles, [...] priorizó los pagos a inversores en 2022. La empresa informó 18 200 millones de dólares en dividendos y recompra de acciones en 2022, es decir, casi cinco veces más de lo que [...] invierte en ‘energías bajas en carbono’”.⁹ Mientras tanto, Eni anunció que en 2023 planea aumentar la extracción de petróleo y gas entre un 3 % y un 4 % por año hasta 2026: “La empresa está en camino de producir más petróleo y gas en 2030 que el año pasado”.¹⁰

De acuerdo con el informe “The Dirty Dozen” sobre el lavado verde de doce petroleras europeas, publicado por Greenpeace Europa Central y Oriental en agosto, mientras aumentaron las ventas, aumentó la distribución de beneficios al interior de las compañías en una proporción mayor a la de las propias inversiones. Una de las conclusiones del informe señala que los ingresos y las ganancias de las compañías aumentaron en promedio entre un 70 % y un 75 %, mientras que las

inversiones solo se incrementaron un 37 %. En un período de altos precios de petróleo y gas, en el que las empresas destinaron gran parte de sus ganancias a beneficios corporativos, los números refuerzan la narrativa de un negocio fósil renuente al cambio. En 2022, el 92,7 % de las inversiones de estas compañías fueron destinadas al sector fósil, y solo el 7,3 % se destinó a la producción de energía baja en carbono, un objetivo que solo tiene relevancia en la publicidad corporativa.

Las principales compañías del sector operan. Se comportan como un grupo compacto, activan en los territorios un fuerte poder de *lobby* para generar condiciones favorables que luego comparten entre sí formando bloques. Así podríamos describir la situación en Guyana, país de menos de 800 000 habitantes, en cuya plataforma continental se ubica uno de los mayores descubrimientos costa afuera de los últimos tiempos. En la denominada cuenca Guyana-Surinam, ExxonMobil, más la petrolera estadounidense Hess y la china CNOOC, son actualmente los principales exportadores de crudo, y desde 2015 posibilitaron la llegada de otros actores, como Tullow, TotalEnergies y Qatar Energy.¹¹

Del lado de Surinam, país vecino a Guyana, se repite la obra con un elenco similar. En 2020 fue el turno de TotalEnergies y Apache, otra petrolera estadounidense, de anunciar descubrimientos masivos en el mar, esta vez en aguas superficiales, que irían en relativa continuidad con los bloques en prospección del lado guyanés.¹² A su debido tiempo, la empresa francesa le dio la bienvenida a Surinam a Qatar Energy,¹³ y junto a ExxonMobil estaría tramando una regulación conjunta de ambos países sudamericanos para explotar la cuenca Guyana-Surinam.¹⁴

5// Jack, S. y N. Edser, “Shell reports highest profits in 115 years”, *BBC* (2/2/2023). Disponible en línea.

6// Edser N., D. Thomas y N. Nanji, “BP scales back climate targets as profits hit record”, *BBC* (7/2/2023). Disponible en línea.

7// Véase para una perspectiva geopolítica más abarcativa en Universidad de la Defensa Nacional, “CEEPAD: Recursos naturales estratégicos: implicancias y desafíos”, video de YouTube, publicado el 12/7/2023; G. Lahoud, “Pujas que la transición energética no disuelve”, OPSur (18/11/2021). Disponibles en línea. Tong, D. y K. Trout, “Big Oil Reality Check 2023. An Assessment of TotalEnergies, Eni, and Equinor’s Climate Plans”, *OilChange International* (25/5/2023). Disponible en línea. Las citas en inglés fueron traducidas por el autor.

8// Tong, D. y K. Trout, “Big Oil Reality Check 2023...”

9// Bukold, S. “The Dirty Dozen. The Climate Greenwashing of 12 European Oil Companies”, *Greenpeace International* (23/8/2023). Disponible en línea.

10// *World Energy Trade*, “Exxon amplía su presencia en Guyana con un sexto proyecto petrolero de 12 900 millones de dólares” (22/8/2023). Disponible en línea.

11// *World Energy Trade*, “Total y Apache realizan un descubrimiento significativo de petróleo en Surinam” (8/1/2020). Disponible en línea.

12// *Petroleum*, “TotalEnergies aumenta su presencia en Surinam” (15/5/2023). Disponible en línea.

13// *Petroleum*, “Total-Exxon desarrollarán el gas de Guyana-Surinam” (22/6/2023). Disponible en línea.

14// *El Cronista*, “Por qué un hallazgo de petróleo en África activa la perforación de pozos offshore frente a Mar del Plata: hay u\$s 100 000 millones en juego”, (8/4/2022); *Oil&Gas Middle East*, “Namibia’s offshore oil discoveries estimated at 11 billion barrels” (24/8/2023). Disponibles en línea.

15// *El Destape*, “La noruega Equinor comenzará la perforación de un pozo offshore a fin de año” (5/7/2023). Disponible en línea.



A esta hiperconectada red de exploración y explotación fósil se incorporaría el mar Argentino. El hallazgo de un importante reservorio de hidrocarburos en el Atlántico frente a las costas de Namibia por parte de Shell y TotalEnergies aumentó la efervescencia de las empresas del sector, que afirmaron que en la Cuenca Argentina Norte habría yacimientos similares.¹⁶ El efecto local fue potente. Todo el sector fósil, que incluye a funcionarios públicos y del consorcio liderado por YPF,

Equinor y Shell, comenzó a emitir casi simultáneamente anuncios para obturar el debate en torno a la perforación de un pozo exploratorio en aguas ultraprofundas en esa cuenca. La aprobación del pozo Argerich es, hasta la fecha, uno de los avances más concretos del sector en cuanto a crear condiciones para allanar el proceso exploratorio costa afuera, frenado por movilizaciones callejeras y acciones judiciales.¹⁷

Haciendo uso de su posición dominante en el sistema energético,

las compañías petroleras nacionales y transnacionales vienen ejerciendo un rol clave a la hora de instalar el tema en el ámbito público. De hecho, no lo llevan a debate. Con gran despliegue territorial, fuerte presencia en medios de comunicación y una aceitada agenda interna, construyen un escenario de avance que se nutre de este panorama global y desembarca en las costas del país con las mismas promesas con las que hace diez años desembarcó en Vaca Muerta: empleo y generación de divisas. ➤

16// *Página/12*, "Litio, petróleo y agua dulce: Estados Unidos ni disimula sus intereses en América latina" (24/1/2023). Disponible en línea.

17// *El Destape*, 5/7/2023. Disponible en línea.

Transición energética y tratados de libre comercio

La estrategia comercial de la Unión Europea para acceder a las materias primas críticas

por Luciana Ghiotto, Lucía Bárcena y Bettina Müller
/ Transnational Institute (TNI)

Foto Unión Europea



En la actualidad, los países centrales han emprendido una carrera hacia una transición energética “verde”. Esta requiere el acceso irrestricto a las materias primas críticas (MPC), las cuales no se encuentran en todas partes del globo, sino que se sitúan mayoritariamente en los países del Sur Global. Para garantizar el acceso a estos materiales, hace una década que la Unión Europea empuja la firma de acuerdos comerciales que incluyan esas garantías entre sus cláusulas. Por ello, los tratados de comercio y de protección de las inversiones juegan hoy un papel clave en el despojo y la explotación de los territorios: el afán de acceder a esas materias primas representa una amenaza real sobre nuestros territorios.

En un discurso que pronunció en Bruselas en mayo de 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó: “Un modelo de crecimiento económico centrado en los combustibles fósiles es

simplemente obsoleto. Necesitamos descarbonizar nuestras economías lo más rápido posible”.^{1/} La transformación del capitalismo en la nueva versión “descarbonizada” se enmarca como una transición verde. La UE ha presentado su Pacto Verde Europeo, una iniciativa compuesta por decenas de medidas para “ecologizar” la economía europea y ser “climáticamente neutra” para 2050. El punto débil de esta iniciativa para transformar las economías europeas es que entre un 75 % y un 100 % de las importaciones de la UE están destinadas a garantizar el acceso a materias primas como tierras raras, litio, cobalto y metales, cruciales para la transición. Por este motivo, además, está en constante competencia con otras grandes potencias económicas (en especial, China, Japón y EE. UU.). De hecho, depende en gran medida de las importaciones de China, de materias primas y productos de valor añadido, como las baterías. En 2020, casi el 100 % de las tierras raras utilizadas en la UE procedían de ese país.

1// “Speech by President von der Leyen at the Beyond Growth Conference in the European Parliament” (conferencia, Comisión Europea, 15/5/2023). Disponible en línea. N. del E.: cita traducida por las autoras.

Con el fin de reducir la dependencia de China y fomentar la autonomía estratégica, la UE presentó la Ley de Materias Primas Críticas, en la que expone la estrategia para diversificar sus cadenas de suministro, con especial atención a los metales y materiales más relevantes.² Es un conjunto de acciones para garantizar el acceso de la UE a un suministro seguro, diversificado, asequible y sostenible de MPC. Parte de esta estrategia es un paquete de acciones externas en el que la firma de tratados de libre comercio (TLC) con capítulos dedicados a energía y materias primas juega un papel preponderante. La UE promueve estos TLC e instrumentos relacionados, como las asociaciones estratégicas sobre materias primas, y los presenta como asociaciones en las que “todos ganan”: la UE obtiene acceso a las MPC necesarias y ayuda a los países proveedores a desarrollar capacidades de procesamiento para avanzar en la cadena de valor de la economía verde. Sin embargo, con más de 20 años de experiencia con los TLC entre la UE y los países del Sur Global, la pregunta es si se puede cumplir la promesa europea y si los TLC son el instrumento más apropiado para ayudar a los países a salir de la trampa de recursos en la que se han mantenido durante siglos.

Aquí sostenemos que la transición verde de la UE se basa en un nuevo conjunto de reglas, incluidos los TLC y otros instrumentos relacionados con el comercio, que intensificarán el extractivismo en los países proveedores. Si bien prometen construir estructuras de procesamiento de materias primas en los países de origen, los acuerdos comerciales y de asociación propuestos profundizarán las asimetrías existentes y no cambiarán los hábitos de la división internacional del trabajo que datan de la época colonial.

Países como Chile, México e Indonesia sufrirán las externalidades que genera la búsqueda de materias primas que acomete la UE para mantenerse en la carrera internacional hacia el establecimiento de un capitalismo “verde”. En el proceso, se crearán nuevas “zonas de sacrificio” en las que se despojará a las comunidades locales de sus medios de vida, y se destruirá el medio ambiente en aras de una reconfiguración del capitalismo.

Asegurar el acceso a materias primas críticas

La Ley de Materias Primas Críticas identifica una lista de materias primas estratégicas que son fundamentales para el desarrollo de la transición verde y digital de Europa, así como para la industria aeroespacial y de defensa.

2// N. del E.: Según el cronograma establecido para el tratamiento de la Ley de Materiales Críticos, entre septiembre y noviembre, tendrán lugar los diálogos tripartitos (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE), mientras que, en diciembre y enero, será la votación en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

Lista 1: Las materias primas críticas definidas por la UE, 2023:

Antimonio, arsénico, bauxita, barita, berilio, bismuto, boro, cobalto, carbón coquizable, cobre, feldespato, fluorita, galio, germanio, hafnio, helio, elementos pesados de tierras raras, elementos ligeros de tierras raras, litio, magnesio, manganeso, grafito natural, níquel (grado de batería), niobio, fosfato de roca, fósforo, metales del grupo del platino, escandio, silicio metálico, estroncio, tantalio, titanio metálico, tungsteno, vanadio.

Fuente: Ley de Materias Primas Críticas, Anexo II, 2023.

Procurando diversificar el suministro de MPC para 2030, la UE estableció un objetivo ambicioso: que no más del 65 % del consumo anual de la Unión provenga de un único tercer país (en cualquier etapa del procesamiento). Sin embargo, las industrias y la mayor parte del consumo de la UE siempre dependerán de las importaciones de algunas MPC.

La estrategia comercial de la UE para acceder a las MPC

En 2008, la Comisión adoptó la Iniciativa sobre Materias Primas, que establece una estrategia con tres pilares para abordar el problema del acceso a las materias primas en la UE: suministro justo y sostenible de materias primas de los mercados globales; suministro sostenible de materias primas dentro de la UE; y eficiencia de recursos y suministro de materias primas secundarias a través del reciclaje.

La palabra clave aquí es *suministro*. El acceso a las materias primas que no están en suelo europeo se ha vuelto crítico en el proceso de transición energética. En este sentido, el primer pilar es crucial. La Comisión propone crear una “diplomacia de las materias primas” que actuará para acceder a estas a un precio no distorsionado. Se entiende que algunos de los proveedores de MPC más importantes se encuentran en China, África, Sudamérica, Rusia y Australia, todos países “sin un sistema de libre mercado o con problemas de inestabilidad política o económica, lo que presenta riesgos especiales”,³ puesto que estas economías emergentes están aplicando más medidas de control estatal que distorsionan el comercio mundial de materias primas, como el control de precios de exportación, cuotas de exportación, sistemas de doble precio y medidas restrictivas para los inversores extranjeros.

Para asegurar el suministro y el acceso, la Comisión incluyó disposiciones específicas sobre energía y materias primas en los acuerdos comerciales con socios clave, especialmente los proveedores de MPC. Por lo tanto, la política comercial se ha vuelto fundamental como mecanismo para garantizar el acceso, ya que los acuerdos le dan a la UE herramientas específicas que le permiten actuar cuando se violen las reglas del libre comercio, tanto de la OMC como de los propios acuerdos comerciales.

Así, la política comercial se percibe cada vez más como un medio para garantizar no solo el acceso a los mercados de otros países o la protección de las inversiones en el extranjero, sino también el suministro de las MPC. Con este fin, se han incluido cláusulas específicas en los últimos acuerdos comerciales. La UE

tiene una intensa agenda de negociación de nuevos acuerdos comerciales, con Indonesia, India, Nueva Zelanda y Australia, y acaba de concluir negociaciones sobre TLC modernizados con Chile y México.

Nuevamente, aquí se ve la reproducción de políticas de tinte colonial mediante las cuales los países del Sur Global proveen materiales que se manufacturan en los países más industrializados. El efecto de estos tratados comerciales es la reproducción, por medios jurídicos, de las condiciones para establecer políticas extractivistas que no generan un salto en la cadena de valor, por ejemplo, de las baterías de litio. La política comercial es remodelada como un dispositivo adecuado a las necesidades de reproducción del capital y de la competencia entre las potencias económicas. ▶

Los capítulos sobre energía y materias primas

Desde que en 2015 la Comisión Europea presentó su nueva estrategia de comercio e inversión denominada Comercio para Todos, se comenzó a incluir en todos los nuevos acuerdos comerciales un capítulo sobre energía y materias primas. Estos capítulos tienen cuatro ejes: la instalación de los principios de mercado en el comercio de materias primas energéticas; el acceso a la infraestructura necesaria para el transporte de energía; la cooperación en materia de estándares; y la cooperación en materia de transición energética.

En este artículo, por una cuestión de espacio, nos concentramos en el análisis del primer punto.

El principal objetivo de los capítulos de energía y materias primas es “facilitar el comercio y la inversión en los sectores de la energía y las materias primas”.⁴ Para ello, se debe eliminar cualquier distorsión que pudiera presentarse. En el contexto de estos capítulos, se entiende por *distorsión* cualquier medida estatal que obstaculice el libre flujo de materias primas desde el socio hacia el territorio de la UE. Por lo tanto, deben eliminarse las siguientes distorsiones:

a) Restricciones a la importación y exportación, que incluyen, en principio, “todos los derechos de exportación o cualquier medida de efecto equivalente”.⁵

b) Monopolios de importación y exportación, para lo cual se debe eliminar “el derecho exclusivo o el otorgamiento de autoridad por parte de una Parte a una entidad para importar bienes energéticos o materias primas de, o exportar bienes energéticos o materias primas a la otra Parte”.⁶ De esta manera, se impide el desarrollo de agencias nacionales que compren materias primas locales y atesoran ese material, por ejemplo, para especular con precios internacionales y condiciones de exportación. El objetivo de esta cláusula es garantizar la existencia de mercados privados competitivos.

c) Precios de exportación, para instalar principios de mercado en el suministro de bienes energéticos y evitar que los fabricantes europeos se encuentren con competidores que gozan de “ventajas injustas” a nivel mundial.

3// Comisión de las Comunidades Europeas, “The raw materials initiative: meeting our critical needs for growth and jobs in Europe” (comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Bruselas, 4/11/2008). Disponible en línea. N. del E.: cita traducida por las autoras.

4// Artículo 1 del capítulo de Energía y Materias Primas de UE-Túnez. En “UE - TUNISIE. Accord de Libre-Échange. Complet et Approfondi (Aleca). Projet de Proposition de Texte. Dispositions Relatives au Commerce de L'énergie et des. Matières Premières”, EU-Tunisia Deep and Comprehensive Free Trade Area: Documents, European Commission. Disponible en línea. N. del E.: cita traducida por las autoras.

5// Artículo 5, Energía y Materias Primas de UE-Túnez...

6// Comisión Europea, “Text of the agreement. EU-Chile Interim Trade Agreement (as published upon its political conclusion in December 2022). Chapter 8 Energy and Raw Materials”. Disponible en línea. N. del E.: cita traducida por las autoras.



La “excepción” en el acuerdo con Chile

Chile es el segundo mayor productor mundial de litio y abastece más del 80 % de la demanda total del metal de la UE: se ha convertido en un socio clave para que la UE tenga acceso a este mineral. El acuerdo comercial firmado es de 2003, pero en 2017 la UE propuso “modernizarlo”, es decir, agregar los nuevos capítulos, importantes para la política europea, como “Energía y materias primas” e “Inversiones” (sobre la protección de las inversiones con un sistema de arbitraje).

La versión de diciembre de 2022 del capítulo sobre energía y materias primas incluye las mismas cláusulas que los acuerdos, por ejemplo, con Nueva Zelanda, pero se introduce una diferencia. Chile logró incluir algunas excepciones: parte del litio se puede vender más barato a las industrias nacionales, según el nivel más bajo alcanzado por los precios de exportación en los 12 meses previos a la venta. De acuerdo con el artículo 8.5 sobre precios de exportación, “Chile podrá introducir o mantener medidas con el objetivo de fomentar la agregación de valor, abasteciendo a sectores industriales a precios preferenciales de materias primas para que puedan surgir dentro de Chile, siempre que dichas medidas cumplan con las condiciones establecidas en el Anexo II”.⁷ De esta cláusula podemos entender que, para Chile, podrían permitirse algunas medidas en materia de precios de exportación. Cabe aclarar que esta cláusula no estaba en la versión anterior del acuerdo, que data de 2018.

Pero, al analizar el Anexo II, que establece las reglas generales de esa cláusula, encontramos que tales medidas “no darán lugar a una restricción a la exportación para la otra Parte” y “no afectarán adversamente la capacidad de la Unión Europea para abastecerse de materias primas” de Chile.⁸ Además, en cuanto a la forma en que se implementan dichas medidas, “Chile compartirá con la UE información detallada y confiable sobre el alcance del producto, el volumen de producción que cubre la medida, si se han realizado ventas internas a precios preferenciales y el mercado interno”.⁹ La excepción, por lo tanto, es muy limitada.

7// Comisión Europea, “Text of the agreement. EU-Chile Interim Trade Agreement...”. Destacado de las autoras.

8// Comisión Europea, “Text of the agreement. EU-Chile Interim Trade Agreement...”.

9// Comisión Europea, “Text of the agreement. EU-Chile Interim Trade Agreement...”.

Argentina en la descarbonización de los países centrales

Una carrera hacia el mismo lugar

por Hernán Scandizzo y Felipe Gutiérrez Ríos /
Observatorio Petrolero Sur



Foto Vaca Bonsai

Vivimos en un mundo hecho a la medida de los combustibles fósiles. Las formas actuales de habitar el planeta están vinculadas a la disponibilidad de energía que garantizan estas fuentes energéticas desde hace dos siglos, debido a la alta tasa de retorno energético y a su relativa facilidad de transporte y de almacenamiento. La globalización capitalista ha sido posible, entre otras razones, por estas cualidades de los fósiles, y este es un punto central para pensar una transición energética que plantee la descarbonización.

El consenso científico en torno a la relevancia del sector energético en la crisis climática provocó un giro en los discursos del capitalismo global. De esta manera, surgió un sector “verde” que comenzó a impulsar una transición energética cuyo objetivo es que las relaciones sociales de poder no sean trastocadas en el marco de la crisis climática. Su agenda es la promoción de energías

renovables como única salida a esta crisis, a partir de un mero cambio de fuentes o, peor aún, la adición de renovables al sistema actual para hacerlo crecer en complementariedad con los fósiles.

Ante esa alternativa se presentan varios desafíos, entre ellos, cómo superar la intermitencia de fuentes como la solar y la eólica, cómo almacenar la energía generada para que esté disponible en el momento que se necesita, o cómo transportarla para atender la demanda del mercado energético global. Desde la década de 1990 las baterías de iones de litio aparecieron como una respuesta a las necesidades de almacenamiento y, en los últimos cinco años, el hidrógeno verde, generado a partir de la electrólisis del agua con fuentes renovables, se presentó como vector estrella.¹ Ambas propuestas, que circulan como prioridades en el repertorio de ofertas de la transición energética del capitalismo verde mundial, tienen su capítulo local.

1// “Sobre los diferentes tipos de hidrógeno, véase Leonardo Salgado y Hernán Scandizzo, “Humo Verde. Notas y comentarios sobre la producción de hidrógeno como vector energético (y los negocios en tiempos de transición)”, *OPSur*, 12/11/2021. Disponible en línea.



Foto de Susi Maresca

“Gobernanza” para el despojo

En junio de este año, tras la aprobación exprés de la reforma de la Constitución de Jujuy, hubo masivas movilizaciones que colmaron las calles y rutas de la provincia y marcaron un hito en las disputas sociales sobre las que se monta la transición energética del capitalismo verde. Aunque en esas jornadas se sumaron luchas diversas —como la reivindicación salarial docente—, el rechazo a la modificación de la carta magna promovida por el gobernador Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, en alianza política con el PJ, funcionó como principio aglutinador.

Aunque el litio no se menciona en la nueva Constitución —que solo se refiere a la promoción de “la industrialización con valor agregado de minerales”—, regular las condiciones de su explotación para que la provincia se abra al mercado litífero es una de sus condiciones fundamentales. Elementos como el desconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y la prohibición de los cortes de ruta en la nueva Constitución jujeña son parte esencial de lo que se denominaría “la gobernanza del litio” en la jerga del capitalismo verde.

Como señaló el filósofo Manuel Fontenla por aquellos agitados días: “Las protestas sociales de los pueblos originarios en Jujuy no son una reacción a la Reforma Constitucional. Sino exactamente al revés, la Reforma Constitucional es la reacción del gobierno, a la auto-organización y defensa creciente de las comunidades originarias en sus territorios”. Aunque el racismo estructural y la búsqueda por mercantilizar el litio están presentes en la represión, por sí solos no la explican. Según Fontenla, “la represión es la respuesta a la autonomía [de los pueblos originarios]. La Reforma Constitucional, es la manera ‘democrática’, entiéndanse, consensuada por el poder político por arriba, para imponer la violencia en los territorios”.²

En la actualidad, hay tres grandes proyectos de extracción de litio en la Argentina: uno en Catamarca, el Salar del Hombre Muerto, a cargo de la empresa Livent, y dos en Jujuy, uno en los salares Cauchari y Olaroz (de la minera Exar) y el otro en Olaroz (de Sales de Jujuy). Sin embargo, todos los salares de Salta, Jujuy y

Catamarca cuentan con pedimentos mineros, y en total hay 50 proyectos en distintas etapas de desarrollo, que podrían aumentar siete veces la capacidad exportadora del país.³

La científica política Melisa Argento y el historiador Jonatan Núñez, integrantes del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), consideran que la alta concentración empresarial es un elemento característico del sector. Cuatro corporaciones, las norteamericanas Albermale y Livent Corp., la chilena SQM y la china Tianqi Lithium, reúnen el 80 % de la oferta mundial. La demanda también se concentra en unas pocas automotrices, empresas electrónicas y de almacenamiento. Sobre la producción de baterías, solo dos empresas —CATL, de China, y Panasonic, de Japón— son responsables de la mitad de la producción mundial para uso automotriz. Este escenario, sostienen Argento y Núñez, limita la capacidad de industrialización, de regulación por parte del Estado y de transferencia tecnológica a nivel local.

Un puñado de declaraciones

También en junio, pero de 2022, las comunidades mapuche-tehuelche de Río Negro marcharon a Viedma en rechazo al otorgamiento de tierras fiscales a la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI) para la puesta en marcha de un megaproyecto de producción de hidrógeno verde. Si bien la movilización tuvo características diferentes a las protagonizadas por los pueblos de Jujuy, y su impacto en la agenda pública nacional fue menor, lo cierto es que también se enmarca en la resistencia al proceso de desposesión impulsado por el capitalismo verde.

En agosto de 2021, FFI firmó una carta de intención con el Gobierno de Río Negro y el Gobierno nacional para la instalación de un complejo industrial. La provincia reservó 650 hectáreas en la costa atlántica para que la empresa instale una planta desaladora, un número no precisado de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, una planta de producción de amoníaco y un puerto de aguas profundas. El complejo industrial obtendría la energía mediante uno o más parques eólicos que montarían en la meseta de Somuncura, un

2// Manuel Fontenla, “Litio, Estado y represión ¿regla o excepción?”, *Página/12*, 21/07/2023. Disponible en línea.

3// Melisa Argento y Jonatan Núñez, “El litio en la transición socio-ecológica justa”, Seminario de Formación Virtual: “Problemáticas socio-ecológicas y transiciones en tiempo de cambio climático”, Clate, 2023.

área natural protegida y sitio sagrado para el Pueblo Mapuche-Tehuelche.⁴

En abril de 2022, el Ejecutivo rionegrino declaró de interés público al proyecto presentado por FFI y poco después la Legislatura sancionó la Ley 5560, que concede al proyecto 625 000 hectáreas de tierras fiscales por el término de 50 años, prorrogables por otros 25 años, para la instalación de parques eólicos. La norma, que afectó directamente a 32 comunidades del Pueblo Mapuche-Tehuelche, se aprobó sin que se implementara la consulta previa, libre e informada, como establece la legislación indígena vigente en el país. “Cuando la policía rodea la Legislatura es porque adentro se están cocinando cosas que no es conveniente que la sociedad sepa. Eso es grave institucionalmente, muestra claramente que detrás de este discurso de la energía renovable, que detrás del discurso del progreso, que detrás del discurso del trabajo, se esconde el negociado de la vida”,⁵ sostuvo Orlando Carriqueo, *werken* de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, sobre las condiciones en que se aprobó la Ley 5560.

La rapidez con que los poderes Ejecutivo y Legislativo respaldaron el proyecto de FFI está en sintonía con la intención de subirse primero al “tren del hidrógeno verde” para obtener ventajas, un objetivo que se expresa en el Plan Estratégico Hidrógeno Verde Río Negro.⁶

En marzo de 2023, la empresa australiana informó que ponía en pausa las mediciones de vientos en la meseta de Somuncurá hasta que se actualizara el plan de manejo del área protegida, y aseguró que, llegado el momento, se encargaría de promover la consulta a los pueblos originarios, con lo cual asumiría un rol que le corresponde al Estado.⁷ En simultáneo, comenzó a circular el rumor de que FFI cruzaría el límite provincial y mudaría su proyecto al noreste de Chubut. El rumor fue acompañado por una serie de

operaciones de arriendo y de venta de tierras privadas (establecimientos ganaderos) “con potencial eólico”.

La megaplanta de Fortescue, que prometían construir y poner en producción en tiempo récord, sigue en etapa de proyecto. Todavía no se ha aprobado el marco regulatorio que exige la compañía, tal como se ha planteado), mientras que la inversión de 8000 millones dólares, carta con la que se presentó la empresa, no es más que un título en un diario amarillento. Sin embargo, un puñado de declaraciones y títulos en la prensa fueron suficientes para dejar en claro las posiciones de diferentes sectores y anticipar impactos y conflictos.

La periferia de la desfosilización

Más allá de la disputa geopolítica generada en torno a la matriz tecnológica que se impondrá para el almacenamiento de energía,⁸ la descarbonización de los países centrales alienta un nuevo proceso de desposesión en los países de la periferia global (“acumulación por desfosilización”, según el GYBC),⁹ aunque en las agendas gubernamentales argentinas aparece como una oportunidad de desarrollo.

Las políticas que se proponen insertar los territorios y bienes comunes en esa carrera están a la orden del día: las provincias del noroeste, que forman el mentado “triángulo del litio” con regiones vecinas de Chile y Bolivia; y la Patagonia y el sur bonaerense, con su potencial eólico, ocupan un lugar central en la geografía de los negocios verdes. La competencia recién comienza, pero ya está dejando marcas en los pueblos y territorios. ➔

4// Hernán Scandizzo y Leonardo Salgado, “El hidrógeno en la senda del neocolonialismo verde”, en *Contrahegemoniaweb*, 13/10/2022. Disponible en línea.

5// Julia Lastra y Esteban Ramos, “Las tierras en la mira: Comunidades Mapuches Vs. Hidrógeno Verde”, *La Tecla Patagónica*, 24/04/2022. Disponible en línea.

6// Leonardo Salgado y Hernán Scandizzo, “Una solución rionegrina para los problemas alemanes”, *OPSur*, 21/07/2021. Disponible en línea.

7// “Hidrógeno verde en Río Negro: Fortescue pausó la medición de vientos en la Meseta de Somuncura”, *Río Negro*, 7/3/2023. Disponible en línea.

8// Martín Ariel Kazimierski, “¿Quién quiere ser carbono neutral? Hidrógeno, la apuesta para reinventar la industria fósil”, Fundación Rosa Luxemburgo BA, 29/09/2023.

9// Martín Ariel Kazimierski y Melisa Argento, “Más allá del petróleo: en el umbral de la acumulación por desfosilización”. *Relaciones Internacionales* 30, n.º 61 (julio-diciembre/2021). Disponible en línea.

Colombia y el desafío de ser una economía para la vida

La propuesta de transición energética a un año de la asunción de Gustavo Petro: desde la campaña hasta las políticas públicas y la agenda del movimiento socioambiental.

por Rosaura Barletta / Observatorio Petrolero Sur

Foto Alianza Colombia Libre de Fracking



“Le propongo al Gobierno de los Estados Unidos y a todos los Gobiernos de América sentarnos a dialogar para asentar los pasos de la transición energética, de la construcción de una economía descarbonizada, de la construcción de una economía de la vida en toda América”,¹ planteaba Gustavo Petro en junio de 2022 luego de la victoria electoral que lo llevó a la presidencia de Colombia.

La propuesta inicial del Gobierno era avanzar en cinco ejes:² invertir en energías limpias y descarbonización; avanzar en la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles; aumentar la eficiencia energética; revisar el marco regulatorio para la generación de energías limpias e impulsar la reindustrialización de la economía colombiana. Lo que vino después es una etapa

que sigue siendo compleja. Las energías comunitarias, los territorios que disputan el derecho a una vida digna, los sindicatos de la energía y diferentes organizaciones socioambientales dialogan con el Gobierno y buscan llenar de sentido un proceso clave para la historia de Colombia. Se trata de un diálogo que implica tensiones, en particular con sectores políticos y empresarios que no aceptan que sus intereses se pongan en juego.

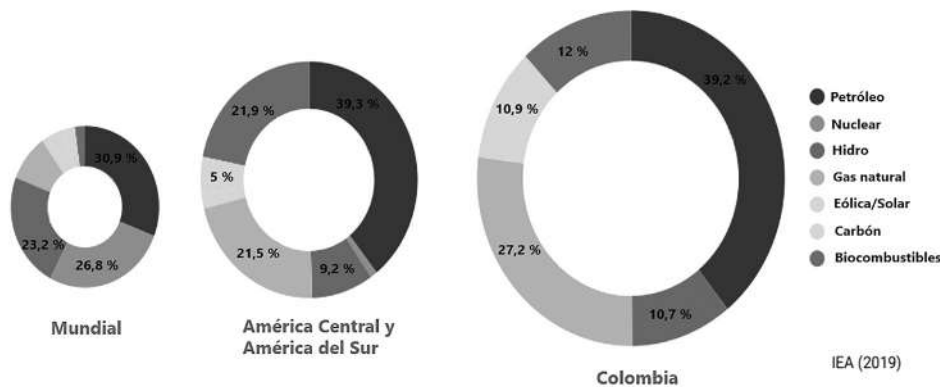
Los combustibles fósiles representan el 77 % de la matriz energética de Colombia. En ese contexto, la mayor apuesta de Petro fue suspender las concesiones de nuevas áreas de exploración hidrocarburífera, medida que se cumple desde su asunción. Para Andrés Gómez, de Censat Agua Viva, *“lo más importante que logró el Gobierno son avances en el diagnóstico, la posibilidad de ampliar el panorama de una transición energética de los combustibles fósiles”.*³

1// Newsroom Infobae, “Petro propone diálogo de América Latina con EE. UU. sobre transición energética”, *Infobae*, 19 de junio de 2022. Disponible en línea.

2// Ministerio de Minas y Energía, “Una Transición Energética Justa y Sostenible”, 15 de marzo de 2023. Disponible en línea.

3// Todas las citas de Andrés Gómez están tomadas de una entrevista personal con la autora.

Composición de la oferta de energías primarias en el mundo, América Central y América del Sur, y Colombia



Fuente: Plan Energético Nacional (2022-2052). Unidad de Planeación Minero-Energética, Gobierno de Colombia.

El punto de partida fue la elaboración colectiva de dos documentos de diagnóstico y proyección. “**Varios de nosotros empezamos a trabajar y a pensar cómo se podría materializar esta idea de transición**”, contó Tatiana Roa Avendaño, de Censat Agua Viva, en el taller virtual Energía, Economía y Ambiente, organizado por OPSur y Latfem en junio pasado.⁴ Con aportes de organizaciones ambientalistas, sindicatos de la energía y comunidades locales que vienen planteando la necesidad de avanzar en una transición, se construyó una propuesta de desescalamiento de las actividades petroleras a 15 años. Tal como explicaron, sería ilógico que se cerrara todo de un momento a otro con los niveles actuales de dependencia fósil.

El concepto de “**economía para la vida**” está a la cabeza del documento *Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda*, elaborado por el conjunto de organizaciones. Desde esa perspectiva, proponen que los proyectos fósiles en curso financien la infraestructura para avanzar en una matriz de generación con fuentes renovables.

La propuesta plantea no realizar nuevas campañas exploratorias de hidrocarburos y avanzar en diseños urbanos, mejoramiento del transporte y nuevos modos de consumo que permitan el avance de la transición ante un régimen que, según afirma Censat Agua Viva, “excreta petróleo”. El documento contempla también la necesidad de que exista una red de alianzas en el Sur Global, indispensable para instalar el debate de la deuda ecológica y la compensación a los países vulnerables.

“Lanzamos el texto en noviembre de 2022, a pocos meses de la llegada de Petro al Gobierno. Traía la inercia de este gran aparato de discusión. Luego se hizo un segundo intento con el lanzamiento de la Hoja de Ruta de la

Transición Energética Justa, publicada en 2023”, explica Gómez. En este nuevo aporte, el Ministerio de Minas y Energía colombiano propone cuatro ejes centrales para seguir discutiendo la transición: los diálogos sociales y las experiencias de diferentes sectores, un diagnóstico de la matriz actual y abordajes sobre la mitigación del cambio climático, escenarios posibles ante el aumento de renovables y el decrecimiento de fósiles, y un mapa energético para identificar potencialidades de la transición (principalmente hidrógeno verde e hidroelectricidad). Tras la publicación de los cuatro textos de la Hoja de Ruta, se otorgó un plazo para recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía.

No es sencillo representarse, en Argentina, cómo diferentes sectores organizados de la sociedad pueden discutir la política energética con un Gobierno y socializar conclusiones con aportes de la ciudadanía. “Un espacio orgánico —explica Gómez— es el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, que permite una incidencia directa en estas políticas”. El Consejo es un organismo de carácter consultivo independiente y ajeno a intereses partidistas, con diálogos colectivos y autonomía de decisión, y lo integran organizaciones con amplia trayectoria de trabajo en el tema de transición energética, que buscan incidir en la construcción de las políticas públicas e impulsar acciones concretas en esta materia.

Obstinación fósil

El movimiento socioambiental colombiano entiende que la transición implica una transformación sustancial para la matriz energética: “Hay resistencia del poder económico y de los medios masivos de comunicación a las propuestas de transición, y se inscribe en un plan más amplio de desestabilización del gobierno”, asegura

4// Todos los testimonios de Tatiana Roa Avendaño están tomados del taller citado.



Gómez. La oposición a la propuesta no está solo afuera, sino también dentro del Gobierno. “Son sectores que ostentan el poder económico, y para los que el extractivismo de fósiles es fundamental. Han sido la institucionalidad de las últimas décadas en Colombia. Se resisten a dejar estos negocios y avanzar en este proceso que, al contrario de lo que se asume, tiene mucho asidero económico”, agrega. La exportación de petróleo representa hoy el 60 % de los ingresos del país.

Aun con la oposición de grupos de poder, hay claridad sobre la necesidad de dejar los hidrocarburos en el subsuelo. Las bajas reservas de petróleo⁵ y de gas, combinadas con la alta dependencia, muestran que no es viable sostener los niveles de extracción.

Los derechos que se pelean en comunidad

La Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de 100 organizaciones, impulsa debates energéticos desde 2012 y ha logrado dialogar con la opinión pública. Gómez recuerda que en esos años Petro apoyó, como congressista, la lucha *antifracking*.

Sobre los procesos comunitarios emergentes, “se trató de dar con el Gobierno una discusión compleja que no tuvo la capacidad suficiente de diferenciación de dos sectores”, advierte Gómez. Los dos sectores son las comunidades energéticas y las energías comunitarias. Al cierre de esta nota hay un decreto en trámite, abierto aún a comentarios de la ciudadanía, sobre comunidades energéticas, espacios que tienen una intención de formalizar y crear instancias de participación oficial. Hacia esa formalización apunta la medida, que

ofrecería financiamiento, formación y mantenimiento de infraestructuras, entre otros aspectos.

En palabras de Tatiana Roa Avendaño, “el de comunidades energéticas es un concepto más europeo, ligado a formas de organización para generar energía en contextos culturalmente diferentes a los nuestros”. En esto se diferencian de las energías comunitarias, que no necesariamente quieren formalizar o crear empresas, que no siempre logran insertarse con su propia identidad en este escenario de transición y que tienen una perspectiva profunda y de mirada sistémica. “Las energías comunitarias son un conjunto de conocimientos, prácticas y procesos de cambio en la producción y consumo de energías y alimentos, que respetan todas las formas de vida presentes en el planeta y que aportan en la mitigación de la crisis climática y en la reconstrucción del tejido social”, explica Censat Agua Viva.

Hay otras iniciativas de política pública, como en el caso de La Guajira, región colombiana declarada en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El ministerio de Minas y Energía emitió el Decreto 1276, que habilita un régimen tarifario especial y transitorio, y da prioridad al desarrollo de energías renovables en la zona. “En La Guajira se asienta la nación wayúu, el pueblo indígena más numeroso de Colombia, y allí hubo procesos muy complejos de emulación del mismo modelo de proyecto extractivo [para la promoción de proyectos renovables], pasando por encima de derechos, sin consulta previa”, advierte Gómez. “La lógica extractiva se mantiene [en una región marcada por la explotación de carbón]. Este conflicto se arrastra desde la gestión anterior, de Iván Duque, y hubo intentos de Petro de destrabarlo. Hay una idea de que la Guajira es un desierto”, asegura.

La nación wayúu atravesó y atraviesa diversas disputas

5// Hasta diciembre de 2022, las reservas probadas de petróleo en el país se situaron en 2100 millones de barriles (Gbl), lo que representa una relación reservas/producción de 7,5 años. Las reservas probables y posibles fueron de 0,7 Gbl y 0,6 Gbl, respectivamente, cifras similares al año anterior. Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Subdirección de Demanda, “Actualización Plan Energético Nacional (PEN) 2022-2052. Tomo I”, junio 2023. Disponible en línea.



relacionadas con el derecho a una vida digna frente a la lógica energívora. En un caso emblemático, llevaron ante la Corte Constitucional colombiana su reclamo contra un proyecto minero carbonífero de la compañía suiza Glencore,⁶ que, según denuncian, provoca la contaminación del agua, la proliferación de enfermedades respiratorias y el agrietamiento de las casas a causa de explosiones, entre otros impactos. La compañía tiene contratos de explotación por más de diez años, y el presidente Petro aún intenta lograr un acuerdo para acotar sus operaciones, al tiempo que mantiene limitada la posibilidad de comenzar nuevos proyectos de explotación minera en La Guajira.

La discusión pública democratiza la transformación

El componente propositivo de las intervenciones en este proceso de transición está ligado a una tradición en la búsqueda de alternativas de las organizaciones que discuten el sistema energético en Colombia. La comprensión de la soberanía energética hizo que permeara una idea contundente: hay economías para la vida y economías para la muerte. Con esa perspectiva, las comunidades nutrieron el programa del Gobierno y siguen incidiendo en las políticas públicas.

Pero no todos debates (sobre los matices) están saldados: el Ministerio de Minas y Energía, los gremios petroleros y algunas otras organizaciones posicionan el gas como combustible puente a la transición, pero otros espacios del ambientalismo cuestionan que esta opción sea una salida posible. “Las reservas vienen en caída desde hace más de 30 años. La frontera más promisoría para la industria es la marina. Ahí tienen grandes expectativas. Especialmente en el gas, pero creemos que el gas no es un combustible de transición”, advierte Roa Avendaño.

“Las luchas contra los extractivismos han estado siempre presentes en Colombia; el movimiento ambientalista es fuerte, alimentado de activistas, pensadores, pensadoras”, celebra Gómez. “Es muy relevante para nosotros un concepto de las comunidades indígenas wayúu: el petróleo mantiene los equilibrios como sangre de la tierra. Y su extracción significa el desangre de la Madre Tierra”. ➤

⁶// Paula Llana, “Megaminería y contaminación en Colombia: las mujeres wayúu luchan por el agua y el territorio”, *Página/12*, 23 de marzo de 2023. Disponible en línea.

De la pobreza energética a la energía para vivir

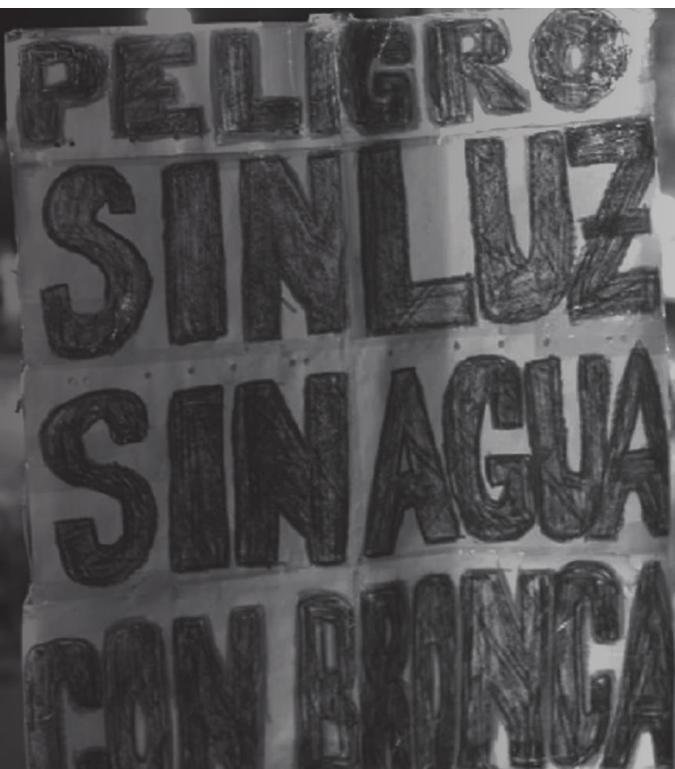


Foto Lomasconectado.com

El sistema energético actual es la base sobre la cual se reproduce el capitalismo. Por eso, las desigualdades que traza el modelo económico se ven reproducidas a nivel energético: la energía ordena la sociedad entre quienes pueden vivir bien con la energía disponible y quienes no. En este artículo presentamos elementos para pensar la energía desde una perspectiva que la entiende como un derecho.

por Felipe Gutiérrez Ríos / Observatorio Petrolero Sur

La Colonia Rural Nueva Esperanza es un barrio que se encuentra a pocos kilómetros del centro de Neuquén. Es vecina del Parque Industrial Neuquén, que en sus casi mil hectáreas alberga algunas de las empresas más importantes del mundo del *fracking* en Vaca Muerta. En torno a esa trama de caños, basureros, torres y fábricas, se encuentra este barrio, cada vez menos rural, que creció en los últimos años a partir de la reubicación de distintas ocupaciones en la ciudad.

En el invierno de 2022, a pocos metros de las torres de perforación de *fracking*, dos incendios distintos mataron a tres personas del barrio, en el sector llamado Ruca Antu. En junio, el colapso de una conexión eléctrica mató a una mujer y su hija en una de las madrugadas más frías de la temporada. En septiembre, pasó lo mismo en la casa de un hombre, migrante chileno, que había instalado su casilla en el lugar unos meses antes.

En estas condiciones de acceso a la energía, las personas conviven con la infraestructura de Vaca Muerta: una de las postales de la injusticia en Neuquén como pasa en tantas otras ciudades de Argentina y América Latina. Los caños, las torres y las promesas de desarrollo coexisten casi sin contradicción aparente con la miseria, el hambre, el frío extremo en invierno y el calor insoportable en verano.

Ese es el sistema energético realmente existente en Argentina, y no un modelo en crisis porque nos pasamos el invierno en “remera y patas” en casa, como decía el empresario Mauricio Macri desde la Casa Rosada. En todo caso, el derroche energético de unos pocos sectores residenciales e industriales es la otra cara de una misma moneda, que es la falta de acceso a la energía. Como un enorme ejército de reserva, los vecinos y las vecinas en la Colonia Nueva Esperanza, y en otros puntos del país, son parte de un sistema que no tiene suficiente energía para ellas, con una energía que no alcanza para vivir.

La pobreza energética

Durante la década de 1970, con la crisis de los precios del petróleo, comenzó a difundirse en los movimientos sociales de Inglaterra la idea de la “pobreza de combustible”. De esa manera se pudo conceptualizar la imposibilidad de pagar por artefactos de calefacción o sus insumos energéticos, lo que provocaba problemas de salud e incluso la muerte de la población urbana más empobrecida en ese país. Y aunque el fenómeno no era nuevo, el uso de ese concepto puso en evidencia esa realidad.

Algunas décadas después, la idea comenzó a considerarse dentro de los debates académicos y a incorporarse en políticas públicas. En ese contexto se popularizó la perspectiva de que los hogares que gastan más del 10 % de sus ingresos en servicios energéticos se encuentran en situación de pobreza energética, concepto que surgió a partir de la sistematización de la idea de pobreza de combustible. Esto llevó a una serie de debates académicos y políticos sobre los métodos para medir la pobreza (y si existe la especificidad de la pobreza energética), los motivos para utilizar esa línea del 10 %, la determinación de las necesidades energéticas de las personas y cómo las satisfacen según sus contextos, entre otros.

Dentro de tales debates aparece el sesgo empobrecedor: la mirada de la política pública sobre la energía suele observar a los sectores pauperizados como objeto de ayudas sociales. De ahí se deriva una perspectiva

asistencialista del acceso a la energía, lo que limita las formas de repensar las relaciones de poder que generan estas desigualdades en el acceso. Del mismo modo, en el debate público sobre el acceso a la energía también se pone el acento en los sectores empobrecidos (por ejemplo, condenando el “robo de la energía” en esos barrios) y no en que ese fenómeno también ocurre en sectores de consumo industrial o barrios privados.

En este estado de cosas, ¿se puede politizar desde la mirada de la pobreza energética? Mónica Guiteras, integrante de la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña, cree que sí, en la medida en que se logre rescatar al concepto de su uso victimizador. “Necesitamos cambiar el foco de la pobreza energética: desde las personas afectadas, que han sido señaladas como responsables como si no supieran consumir, y ponerlo en las empresas que hacen que estos servicios sean impagables, inseguros”, señala Guiteras.¹

El derecho a la energía

Además del sesgo empobrecedor, durante las últimas décadas la cuestión energética ha pasado de manera casi exclusiva por el problema de la generación. En este periodo, en Argentina y América Latina han sido innumerables los conflictos originados por procesos como la extracción de hidrocarburos, la instalación de centrales hidroeléctricas, el avance de energías

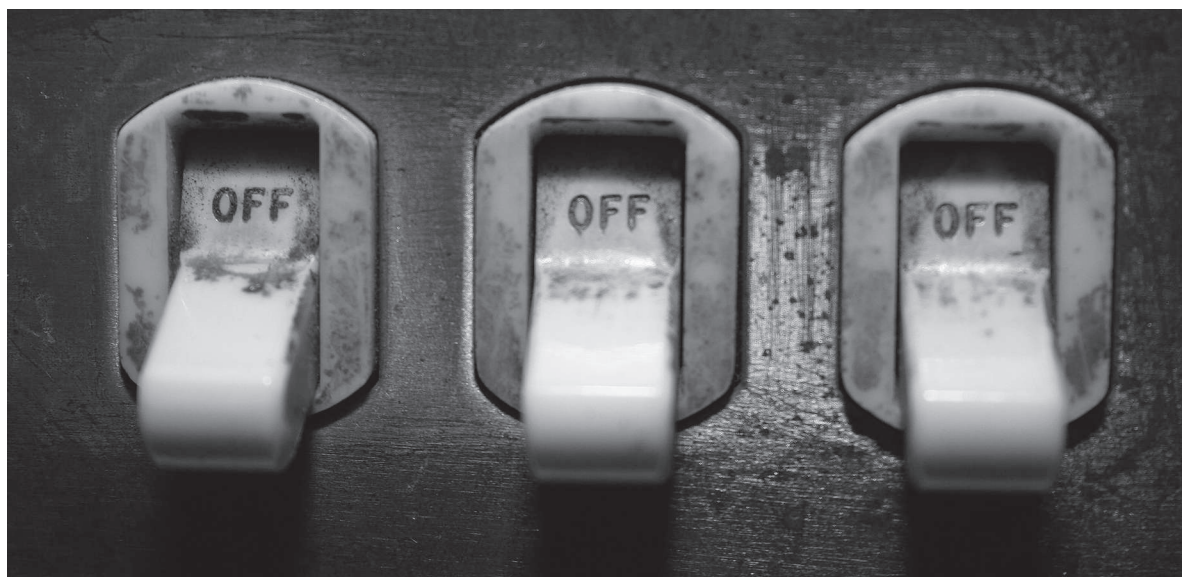


Foto @pcross666

1// “Discutir pobreza energética es discutir privilegios”, en *Observatorio Petrolero Sur*, 27 de octubre de 2021. Disponible en línea.



Foto Vaca Bonsai

renovables, la instalación de centrales nucleares o la disposición final de sus desechos. De esta manera, comienza a surgir un movimiento social basado en la crítica al modelo energético actual y en la demanda de una transición energética popular.

Sin embargo, la otra punta del sistema energético, es decir, los consumos, por lo general han provocado menos movilización. Se trata de un problema transversal en la mayoría de las organizaciones. Mientras que en los movimientos sociales la cuestión del acceso no aparece dentro de las demandas principales, los sectores socioambientales centran su crítica en la extracción, y para el grueso de las organizaciones políticas el tema energético simplemente no existe. A partir de ese diagnóstico, creemos que hay tres cuestiones que pueden revelarse como fundamentales para

llevar adelante la lucha por el acceso a la energía desde las organizaciones sociales.

Un primer elemento es que el sistema social y económico capitalista está basado a su vez en un modelo energético que lo sostiene. La estructura económica requiere de la base energética que entrega la disponibilidad de energía sobre la cual se asientan las distintas actividades económicas. Por eso es imposible entender la era dorada del capitalismo del siglo xx sin el petróleo: el aumento en la extracción de este bien común estuvo en relación directa con la ampliación de la acumulación capitalista en el mismo periodo. De igual modo, durante las últimas décadas las luchas por poner un freno a la extracción petrolera y a la privatización de nuevas fuentes de energía, son parte de un freno al avance del capital. Discutir el

modelo energético actual, entonces, es una de las formas principales de debatir el sistema económico vigente.

La segunda cuestión tiene que ver con las desigualdades sociales que provoca este modelo energético. La energía vista como mercancía genera una división: de un lado quedan las personas y las actividades industriales que pueden consumir energía onerosamente y, del otro lado, quienes no logran cubrir siquiera los consumos básicos o tienen problemas de acceso, como en la Colonia Nueva Esperanza de Neuquén. Ahí es donde entra en pugna la perspectiva del derecho. Por ejemplo, el agua que corre por un río es un bien común que puede ser transformado en un derecho, como es la energía. Sin embargo, este pasaje de bien común a derecho se ve interrumpido por el modelo económico. En el capitalismo, la

energía también se vuelve capital, lo que transforma elementos como el petróleo y la electricidad en una forma de relación social. De esta manera, el modelo energético produce y reproduce las desigualdades del modelo económico.

El tercer elemento está vinculado a esta visión de la energía como un derecho. Lejos de la mirada empobrecedora que tienen algunas perspectivas académicas sobre la cuestión de la pobreza energética, América Latina tiene una larga tradición de luchas por el acceso a la energía. Así, procesos como las demandas de electrificación, los conflictos por la construcción de hidroeléctricas, las denuncias por la explotación petrolera o contra las privatizaciones de las empresas públicas son parte de una trama que históricamente ha atravesado nuestro continente, en donde sectores populares se han organizado para ponerle freno al modelo energético o disputar otra manera de gestionarlo.

Estos tres elementos —la relevancia de la energía para el modelo, las desigualdades que este reproduce y la manera en que la energía organiza a las personas— reunidos por la demanda de la energía como derecho pueden ser un primer paso. Esa lucha, hermanada con la tradición antiextractivista, conforman una base sobre la cual las disputas por la energía toman, a la vez, contenido y cuerpo social.

Energía para vivir

En julio de 2022 en Ecuador, luego de 18 días de movilización, las organizaciones indígenas que habían paralizado el país comunicaron una larga lista de acuerdos con el Gobierno. El primer punto era una baja en el precio del diésel, fundamental para la economía de pequeños y medianos productores indígenas y campesinos. El segundo punto era el acuerdo de no ampliar la frontera petrolera, una de las principales demandas de las comunidades indígenas afectadas por el extractivismo.

Las luchas por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población se encuentran enmarcadas en unos territorios —y a nivel global, en un planeta— vaciados y contaminados. Los incendios de la Colonia Nueva Esperanza de Neuquén son parte de una escena que se repite en muchos sitios: muertes y problemas de salud por instalaciones de gas mal hechas, incendios por conexiones defectuosas, enfermedades por falta de acceso al agua potable, entre otras cosas.

Dentro de esta aparente contradicción entre la lucha por bajar el precio del petróleo y la oposición a su extracción se encuentra una de las claves del momento político actual. Si necesitamos tanto la energía para vivir, como la necesita el capital para reproducirse, en la disputa por ella se juega el modelo de sociedad que tendremos. Que alcancen los bienes comunes que tenemos, pero que alcancen para vivir bien. ▶



transition



TRANSITION 2.0

UNA ANIMACION PRODUCIDA POR EL OPSUR Y EL COLECTIVO AUDIOVISUAL VACABONSAI, QUE SE PROPONE EXPLICAR, UTILIZANDO LOS ROLES DE UN VIDEOJUEGO, LA COMPLEJIDAD DE UN PROCESO DE TRANSICION ENERGETICA.

ESCANEA PARA VERLO



Vaca Muerta

el cuento del oro negro y la lluvia verde



Extraer petróleo por medio del fracking promete cubrir el suministro de energía por años y generar riqueza, trabajo y desarrollo nacional. Pero los mecanismos más frecuentes de inversión de las empresas transnacionales no son lo que parecen. "Vaca Muerta: el cuento del oro negro y la lluvia verde", un trabajo de EJES y el Colectivo VacaBonsai.

ESCANEA PARA VERLO



VISITA NUESTRO CANAL



Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental



• **la década fracturada** •
• **¿bajo en carbono?** • **alto**
en saqueo • **transiciones**
en disputa •

